



OTT Consulting

www.onthinktanks.org/ott-consulting

**Transparencia, participación y
rendición de cuentas: análisis
del panorama y evaluación de
la concesión de subvenciones
de la Hewlett Foundation entre
2015 y 2020**

Ajoy Datta, Jenny Lah, Linnea Mills,
Fletcher Tembo

—
2021

CONTENTS

SOBRE ESTE REPORTE	3
1. TENDENCIAS MUNDIALES	4
1.1 Demostración de la relevancia de la TPA en un mundo cada vez más autocrático.....	4
1.2 La progresión evolutiva de la TPA.....	12
2. TENDENCIAS DE FINANCIAMIENTO	23
2.1 La COVID-19 y el financiamiento de la TPA	23
2.2 Cambios internacionales y regionales en el financiamiento.....	25
2.3 Tipos de organizaciones financiadas	27
2.4 Cambios en las estrategias de los financiadores	28
2.5 Igualdad de género e inclusión social en las estrategias de los financiadores	32
3. INSTANTANEAS DE LA SITUACION EN DIVERSOS PAISES..	36
3.1 Burkina Faso	36
3.2 Ghana	42
3.3 Kenia	48
3.4 Sénegal	54
3.5 Tanzania	59
4. METODOLOGIA Y DATOS.....	68
4.1 Tendencias internacionales en la TPA: metodología y datos.....	68
4.2 Tendencias de financiamiento: metodología y datos	74
4.3 Instantáneas de la situación en diversos países: metodología y datos	82

SOBRE ESTE REPORTE

Cada año, el equipo de transparencia, participación y rendición de cuentas (TPA, por sus siglas en inglés) de la Hewlett Foundation, comprendido por cuatro oficiales de programa y tres asociados de programas, concede aproximadamente entre 30 y 35 millones de dólares estadounidenses en subvenciones a organizaciones que trabajan en la incidencia con los gobiernos, exigiendo que divulguen más información y que se ayude a las comunidades a abordar los problemas que afrontan, en especial la calidad de los servicios públicos.

En 2020, la Hewlett Foundation encargó a OTT Consulting que llevara a cabo una evaluación de la estrategia de concesión de subvenciones para la TPA (2015-2020) y un análisis del panorama del campo de la TPA, como parte del proceso de renovación de la estrategia quinquenal.

La evaluación examina lo sucedido durante el ciclo anterior de la estrategia, mientras que el análisis del panorama explora la situación actual en la que se encuentra este ámbito y cómo evoluciona, a fin de contribuir al aprendizaje, la adaptación y la respuesta del equipo ante este nuevo contexto en su estrategia para el período 2020-2025.

La Hewlett Foundation y OTT esperan que la publicación de los resultados de esta labor ayude a otras organizaciones y personas que trabajan en el campo de la TPA.

1. TENDENCIAS MUNDIALES

- Demostración de la relevancia de la TPA en un mundo cada vez más autocrático
- La progresión evolutiva de la TPA

Se han adaptado algunos artículos extraídos de un informe no publicado sobre las tendencias mundiales en el ámbito de la transparencia, participación y rendición de cuentas (TPA, por sus siglas en inglés), redactado para complementar un análisis del panorama de la TPA realizado por OTT Consulting con el objetivo de sustentar la nueva estrategia de concesión de subvenciones de la Hewlett Foundation. La autora es Linnea Mills. El análisis se basa en una revisión de publicaciones pertinentes y entrevistas con intelectuales minuciosamente escogidos. [Más información sobre el alcance, la metodología y las fuentes.](#)

1.1 Demostración de la relevancia de la TPA en un mundo cada vez más autocrático

En esta sección abordaremos:

- La necesidad apremiante de recabar evidencias más contundentes
- Búsqueda del eslabón perdido entre la TPA y el impacto en el desarrollo
- Nuevas formas de trabajar y organizarse
- Los riesgos que plantean los nuevos métodos de trabajo

1.1.1 La necesidad apremiante de recabar evidencias más contundentes

Un reto conocido, un imperativo renovado

En 2010, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (llamado ahora Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido) decidió que había llegado el momento de conocer mejor las repercusiones y la eficacia de las iniciativas emprendidas en el campo de la TPA y, para tal fin, encargó a John Gaventa y Rosemary McGee que evaluaran las evidencias.

Se percataron de que este campo dependía de «hipótesis normativas no contrastadas y relaciones insuficientemente precisadas entre mecanismos y resultados», y que «las pruebas disponibles sobre el impacto son desiguales y escasas, teniendo en cuenta toda la atención y el financiamiento de donantes que se destinan a este ámbito» (Gaventa y McGee, 2013: 11, 16).

Una década más tarde, no solo siguen existiendo numerosas lagunas sobre el conocimiento sino que, además, el imperativo de demostrar que las hipótesis del campo de la TPA siguen gozando de relevancia en la actualidad es, ahora, aún más importante considerando las tendencias mundiales que apuntan hacia la autocratización y la formulación de políticas impuesta desde las altas esferas.

En un mundo que está, cada vez más, dando la espalda a los ideales democráticos y sumido en un clima político en el que numerosos gobiernos intentan desacreditar a la democracia y a la participación ciudadana, el campo de la TPA solo tiene una opción: caminar sobre terreno firme.

Según los expertos e intelectuales con los que conversamos, la falta de pruebas sobre los efectos de las iniciativas de TPA suponen una amenaza existencial para este ámbito. Como lo describió un intelectual con el que hablamos, las oportunidades para la rendición de cuentas social solo perdurarán si somos capaces de demostrar que la rendición de cuentas social funciona y que vale la pena seguir apoyándola.

Evidentemente, muchos son los factores que influyen en el apoyo que brindan los donantes a los diferentes temas y países, y la TPA puede recibir esta ayuda debido a su valor intrínseco en el fortalecimiento de la democracia, así como a su valor decisivo en la mejora de los servicios públicos.

A pesar de esto, el riesgo de sufrir retrocesos en materia de TPA no solo reside en las perspectivas de los gobiernos y financiadores, sino también en las de los mismos ciudadanos.

Según un estudio reciente, el desistimiento por parte de los ciudadanos podría deberse a que no perciben que la transparencia y la participación conduzcan a la rendición de cuentas. En este estudio, se corroboró que en aquellos países con una alta incidencia de la corrupción, la transparencia se asocia con una sensación de resignación y de abandono de la participación pública entre los ciudadanos (Bauhr y Grimes, 2014).

En un examen sistemático de las pruebas se halló que los efectos de la transparencia son, en gran medida, producto del entorno en el que se practica (Cucciniello et al., 2017). En este sentido, la gran presencia de sesgos en las investigaciones realizadas en el campo de la TPA es especialmente alarmante. Un intelectual señaló lo siguiente:

«Si analizamos las revisiones bibliográficas sobre la fiscalidad en África, apenas figuran académicos y universidades reputados del hemisferio sur».

Las instituciones de investigación del hemisferio sur suelen tener menos oportunidades de recibir financiamiento público, en comparación con sus equivalentes del hemisferio norte. Por lo tanto, los donantes y financiadores externos tienen un importante papel que desempeñar para subsanar este déficit de recursos. La comprensión de estas condiciones esenciales sigue siendo un obstáculo para la investigación en materia de TPA, por lo que es útil buscar la perspectiva de quienes mejor conocen el contexto operativo.

1.1.2 **Búsqueda del eslabón perdido entre la TPA y el impacto en el desarrollo**

Si bien existen dudas sobre la utilidad de la transparencia y la participación para generar una rendición de cuentas, la incertidumbre que se cierne sobre el impacto en el desarrollo de la TPA es incluso mayor. Un intelectual afirmó lo siguiente:

«Tanto los actores del campo de la TPA como otros en general están cansados de que se hayan invertido tantos recursos en la transparencia y la participación, sin que ello parezca materializarse en una transformación de la realidad de los ciudadanos ni en mejoras verdaderas en la prestación de servicios públicos. La pregunta es, por tanto, ¿cuál es el eslabón perdido?».

Primer candidato para el eslabón perdido: las lagunas en la implementación

En el caso de muchas iniciativas en materia de TPA, el resultado de su labor consiste en la promulgación formal de leyes y normativas, incluyendo leyes de divulgación sobre la gobernanza de los recursos naturales o la transparencia en la contratación pública, entre otras (Mills, 2019; NRGI, Natural Resource Governance Institute, 2019).

Varios actores e iniciativas en el campo de la TPA (incluyendo beneficiarios de la Hewlett Foundation) han empezado centrarse en lo que denominan «lagunas en la aplicación», es decir, la incapacidad de aplicar, defender y hacer que se respeten plena y adecuadamente las leyes promulgadas en materia de TPA.

El presunto vínculo entre las reformas relacionadas con la rendición de cuentas y los progresos en el desarrollo se desmorona ante la ausencia de una aplicación eficaz.

Por ejemplo, si el responsable del control presupuestario no ejecuta el presupuesto de un país (o sector) de conformidad con las leyes votadas por el Parlamento o Congreso (de Renzio et al., 2019), ¿cómo van a contribuir a la mejora de la salud las partidas del

presupuesto asignadas a la prestación de servicios de salud si los fondos que existen (sobre el papel) nunca se invierten?

Segundo candidato para el eslabón perdido: ecosistemas de rendición de cuentas

Otro elemento que está acaparando atención en el eslabón perdido entre la TPA y el impacto en el desarrollo es el papel de los ecosistemas de rendición de cuentas. Esto pone en tela de juicio el enfoque de numerosos actores del campo de la TPA, que han tendido a centrarse en el fortalecimiento de las instituciones de rendición de cuentas al margen del contexto más amplio e interrelacionado en el que trabajan.

Como se pone de manifiesto en investigaciones publicadas recientemente sobre sistemas de auditoría, en términos de impacto, se puede esperar poco del fortalecimiento de la entidades fiscalizadoras superiores si, por su parte, las instituciones y los procesos que trabajan con las conclusiones de las auditorías (incluyendo a las comisiones parlamentarias de contabilidad pública y las organizaciones de la sociedad civil) permanecen frágiles (IBP/IDI, 2020).

En el otro lado de la moneda, hay quienes se muestran moderadamente optimistas sobre la manera en que las cuantiosas medidas de estímulo adoptadas por la pandemia mundial de la COVID-19 pueden ayudar a otorgar una mayor prioridad política a la rendición de cuentas financiera, lo cual (si recibe la atención suficiente) podría tener un efecto duradero y positivo en los sistemas de rendición de cuentas en general.

1.1.3 Nuevas formas de trabajar y organizarse

Los movimientos y protestas de los ciudadanos en el centro de los problemas mundiales

Para conservar y continuar demostrando su pertinencia, el ámbito de la TPA debe hallar maneras de formar parte de las soluciones a los grandes problemas mundiales de nuestro tiempo, como el cambio climático, la democracia y la igualdad. Uno de los intelectuales explicó lo siguiente:

«Los financiadores se sienten presionados a conectar la TPA con las crisis de desempleo del hemisferio sur o las desigualdades raciales, la democracia, etc. Intentan encontrar un conjunto más amplio de cuestiones y examinar cómo se relacionan entre sí, y esto está permeando a otros grupos, como los actores específicos de la transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo contribuye su trabajo a promover movimientos más amplios? Veo que, en la actualidad, a muchos donantes les

cuesta realizar esa adaptación, y es un tema que acapara gran parte de los debates y las sesiones estratégicas de diferentes organizaciones».

Los actores tradicionalmente organizados del ámbito de la TPA se alejan del centro de estos problemas mundiales, eclipsados por las protestas multitudinarias y los movimientos de base ([en sus múltiples manifestaciones](#)).

En 2019, millones de ciudadanos se movilizaron para exigir la acción política en la lucha contra el cambio climático, con una protagonista inesperada, la adolescente Greta Thunberg; mientras que 2020 entrará en los anales de la historia por las movilizaciones en masa de los ciudadanos contra la desigualdad racial.

¿Profesionalización o movimientos de base? Una paradoja para la legitimidad

Estos movimientos ciudadanos están más cerca de los ciudadanos (o al menos así se percibe), lo cual se está convirtiendo en el talón de Aquiles de la TPA, un campo en el que, a menudo, las ONG nacionales e internacionales suelen ofrecer una imagen de profesionalidad, pero también una sensación de lejanía ya que suelen estar ubicadas en el hemisferio norte o en las capitales.

Por una parte, la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) les ha permitido participar en conversaciones técnicas y de alto nivel en áreas como la gobernanza de los recursos naturales. Por otra parte, se teme que esto las haya alejado de la comunidad y, consecuentemente, despojado de su legitimidad entre los responsables de la toma de decisiones. Un intelectual de una ONG explicó lo siguiente:

«Los responsables políticos nos preguntan: “¿en nombre de quién hablan?, ¿a quién representan?, ¿por qué debería escucharlos?”. Cuanto más nos distanciamos de los ciudadanos y de las opiniones de los afectados sobre el terreno, menor será nuestra legitimidad. A su vez, la falta de legitimidad socava la capacidad y habilidad de ejercer presión sobre los gobiernos. Por lo tanto, observamos que estamos generando mucho conocimiento pero nuestra habilidad de exigir que los gobiernos tomen medidas es limitada».

Los responsables políticos no son los únicos en cuestionar a quién representan estas organizaciones; los mismos ciudadanos a los que supuestamente representan también dudan de su legitimidad.

Entretanto, mientras las organizaciones de la TPA han luchado por defender su legitimidad, los que hacen campaña a nivel de base se enfrentan al desafío de convertir la energía depositada en las protestas en impacto político.

En una investigación realizada recientemente por el Carnegie Endowment for International Peace se presentan dos opciones para reconciliar esta división. La primera sugiere que las ONG profesionalizadas intenten crear un modelo híbrido, desarrollando capacidad interna para realizar análisis de políticas y movilizaciones en masa. La segunda consiste en que estas organizaciones formen coaliciones formales o informales con grupos que trabajan a nivel de base.

Sin embargo, ambas estrategias plantean dificultades: las ONG tendrán que desarrollar nuevas destrezas, intentar aunar culturas y metodologías organizativas diferentes, y definir y articular exigencias políticas que no solo sean sólidas desde el punto de vista técnico sino que, además, capten la atención del público. En muchos casos, el camino de la formación de coaliciones será más sencillo, pues no requiere modificar las estructuras internas organizativas y de personal (Bellows, 2020).

La unión hace la fuerza

Que la formación de coaliciones está en aumento es una realidad, como destacó uno de los intelectuales:

«Sin duda, las coaliciones son una tendencia que parece estar en alza, y muchas organizaciones ya no trabajan de manera aislada, sino que buscan formas de atraer a otros actores. De este modo, en este espacio no se establecen grandes organizaciones sino que, más bien, se unen muchas organizaciones pequeñas. Puede que esto se deba a una táctica de supervivencia, ya que los recursos son limitados».

Asimismo, la formación de coaliciones, como se sugiere aquí, surge como una estrategia de mitigación de riesgos y, con la reducción del espacio civil en muchos países, es probable que seamos testigos de cómo cada vez más OSC van aunando fuerzas. Ejemplo de esto es algo interesante que ha sucedido recientemente en Ghana, donde más de 400 organizaciones de la sociedad civil se unieron para cuestionar la decisión del presidente

de obligar al director de la Entidad Fiscalizadora Superior del país a tomarse una prolongada excedencia de su puesto. La coalición alegó que la orden del presidente al auditor general, conocido por sus fervientes campañas contra la corrupción, contradice el espíritu y la letra de la Constitución de 1992 de Ghana (GhanaWeb, 2020). Posteriormente, un número menor de OSC llevó al Gobierno ante los tribunales.

1.1.4 Los riesgos que plantean los nuevos métodos de trabajo

El campo de la TPA está organizándose con métodos nuevos y diferentes, una tendencia que ha llegado para quedarse, ya sea mediante la unión de fuerzas entre las ONG y los movimientos de base a escala vertical, como a escala horizontal a través de coaliciones de la sociedad civil.

Estos cambios suscitarán cuestiones importantes relacionadas con el riesgo, tanto para los donantes como para las organizaciones e iniciativas que acepten financiamiento externo.

En los últimos años, algunos de los donantes bilaterales más grandes han empezado a prestar una mayor atención a la gestión del riesgo (Gulrajani y Mills, 2019). La gestión del riesgo no consiste en eliminar los riesgos, sino en articular y mitigar los mismos (así como cualquier riesgo imprevisto) mediante la puesta en práctica de medidas.

Desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo, el riesgo puede agruparse en tres categorías superpuestas (OCDE, 2014):

- Por riesgo contextual se entiende los posibles resultados adversos que podrían surgir en un contexto en particular, como puede ser el riesgo que supone para la participación cívica la tendencia hacia la autocratización y el consiguiente cierre del espacio cívico. La influencia de los donantes respecto a los riesgos contextuales a corto plazo es escasa, pero intentan respaldar intervenciones que generen las condiciones necesarias para reducir los riesgos a largo plazo.
- Por riesgo programático se entiende el riesgo a que las intervenciones no alcancen sus objetivos o provoquen un daño involuntario, por ejemplo, exacerbando las tensiones sociales. Los riesgos programáticos están relacionados con las debilidades en el diseño y la ejecución de los programas o con una relación disfuncional entre el donante/financiador y sus socios encargados de la ejecución/beneficiarios.
- Por riesgo institucional se entiende las diversas consecuencias que el fracaso (en sus distintas formas) de programas/intervenciones de los proyectos pueden tener para los donantes/financiadores o los beneficiarios. El riesgo para la reputación es una parte importante del riesgo institucional. Los donantes emplean fondos

públicos o donaciones, con el consiguiente escrutinio por parte de los procesos políticos y/o la prensa, por lo que su reputación está en juego. Esa reputación puede verse gravemente dañada en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, debido a un escándalo de corrupción que implique a un beneficiario.

En lo que respecta a la tendencia que apunta hacia una colaboración vertical entre ONG y organizaciones de base, el riesgo añadido para los donantes podría ser que, mediante sus subvenciones a las ONG, se les implique (indirectamente) en la política de partidos. Esto ocurre, en especial, en países donde se vincula a los movimientos populares con partidos de la oposición o tienen otras afiliaciones políticas o religiosas.

Podría aplicarse un enfoque cauteloso similar a la hora de establecer coaliciones entre las organizaciones de la sociedad civil o formar parte de las mismas. Cada beneficiario pasa por un proceso de examen, pero si estos trabajan en coalición o establecen coaliciones con otras OSC, las acciones del resto de actores podrían tener repercusiones para el donante.

Además, existe un posible riesgo programático asociado al apoyo a movimientos de base o a ONG que deseen crear vínculos verticales con los movimientos, lo cual está relacionado con el posible daño que puede causar el financiamiento externo. En contextos en proceso de autocratización, los gobiernos han intentado deslegitimar a organizaciones que aceptan financiamiento externo y evitan que dichos fondos lleguen al campo de la TPA. En Etiopía, por ejemplo, el discurso del Gobierno culpa al financiamiento extranjero de espolear un sector de ciudadanos activistas que abogan por la rendición de cuentas gubernamental. Con esto en mente, el Gobierno promulgó una ley por la que si una OSC recibe más de un porcentaje determinado de su presupuesto de fuentes externas debe registrarse como un agente extranjero, lo que, además, les desautoriza para realizar diferentes actividades. Los Gobiernos de Tanzania y Kenia van por el mismo camino.

Uno de los intelectuales advirtió lo siguiente:

«Si bien es esencial respaldar los movimientos, esto debe hacerse de manera que dichos movimientos salgan reforzados, y tenemos que analizar qué ha funcionado a este respecto. ¿En qué sentido ha contribuido positivamente el apoyo externo a los movimientos? El análisis del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos podría ser un buen punto de partida. Es importante destacar que convendría esforzarse en

entender qué influencia tiene el financiamiento en los movimientos antes de ponerlos en marcha».

Un informe reciente sentó algunas bases útiles a este respecto (Datta y Baertl, 2020), analizando por qué y cómo tiene lugar la colaboración entre los grupos de reflexión y los movimientos sociales, y la mejor manera de respaldar dicha colaboración por parte de los financiadores.

1.2 La progresión evolutiva de la TPA

Durante nuestras entrevistas con intelectuales del ámbito de la TPA, observamos cómo emergía un patrón común: los subcampos de la TPA evolucionan y progresan por tres etapas. Cada una de estas etapas evolutivas plantean oportunidades y riesgos específicos para los donantes.



Etapa 1: cambio de normas

La primera etapa evolutiva consiste en difundir una idea y cambiar las normas mundiales. Esta etapa es, probablemente, la menos complicada de respaldar para un financiador.

La difusión de normas mundiales comienza con la aparición de una norma como, por ejemplo: las empresas deberían invertir y comportarse de un modo más responsable. Cuando la norma se adopta en suficientes países, se alcanza un punto de inflexión y muchos otros países se suman a la norma en respuesta a la presión internacional.

Esta difusión de la norma es algo de lo que, principalmente, se encargan las organizaciones internacionales, asociaciones profesionales y coaliciones internacionales de incidencia, que encabezan los esfuerzos de formular, codificar y validar estas normas mundiales (Finnemore y Sikkink, 1998; Martinsson, 2011).

¿Qué implicaciones tiene esto para las organizaciones del campo de la TPA, así como para los riesgos y oportunidades? En primer lugar, la organización ideal para emprender esfuerzos en esta primera etapa de la evolución de la TPA sería una ONG internacional orientada a la incidencia, con presencia mundial y con sede en importantes centros políticos.

Para los donantes, es posible que los principales riesgos durante esta etapa de cambio de normas sean de naturaleza programática: los dirigentes políticos podrían rendir falsas alabanzas a la nueva norma sin tener que cambiar nada en la práctica; sin una intervención con resultados tangibles, podría ser complicado exigir que estos dirigentes rindieran cuentas de sus palabras o que demuestren el progreso realizado.

Etapa 2: cambio de reglas

Una nueva norma mundial no puede permanecer como un concepto abstracto durante demasiado tiempo, sino que debe afianzarse en leyes, reglas y comportamientos. Es, en ese momento, cuando la nueva norma divulgada y adoptada se enfrenta al contexto institucional y político de un país, incluyendo posibles intereses creados que tratan de mantener el *statu quo*.

En su esfuerzo de cuestionar formas establecidas de proceder, la organización encargada de impulsar la agenda de TPA en un subcampo podría recurrir a otros socios como, por ejemplo, los movimientos de base, o formar coaliciones con otras organizaciones.

En otras palabras, el afianzamiento o la institucionalización de una nueva norma es, intrínsecamente, una tarea política a nivel nacional. Como tal, esta etapa del cambio de reglas presenta muchos más riesgos para los donantes o financiadores externos, quienes deben permanecer con los ojos abiertos a la hora de brindar ayuda a un subcampo durante esta etapa.

Etapa 3: conseguir que funcione en la práctica

Algunos subcampos de la TPA están lo suficientemente bien establecidos como para afianzar exitosamente sus normas en políticas o leyes nacionales. Entonces, ¿qué falta por hacer?

La tercera etapa en la evolución de un subcampo gira en torno a la ejecución: garantizar que las políticas y leyes se respetan tal y como estaban concebidas. Además, esta etapa puede considerarse una prueba de fuego para demostrar la validez de la fórmula siguiente: transparencia + participación = rendición de cuentas.

En esta etapa, las políticas nacionales pierden protagonismo para cedérselo a las relaciones en materia de rendición de cuentas, más localizadas y mucho más reducidas por naturaleza. Aunque se disminuyen algunos de los riesgos para los donantes y financiadores, esta etapa también va acompañada de una reducción de las oportunidades para demostrar el éxito alcanzado que sí podría aportar el anuncio de una reforma de política.

En cuanto a la comunicación, la legitimidad es fundamental: no solo cuenta qué se dice sino quién lo dice. Además, si bien las coaliciones estratégicas eran un elemento clave en la etapa anterior, en esta etapa lo importante es la participación masiva.

La pregunta es: ¿en qué situación deja esto a los donantes? ¿Qué tipo de organizaciones reúnen mejores condiciones para respaldar los subcampos de la TPA en esta etapa de su evolución? ¿Qué puntos de acceso y oportunidades tienen los donantes y financiadores a su disposición?

Las respuestas a estas preguntas se encuentran, en parte, analizando los subcampos de la TPA que han progresado hasta esta tercera etapa (al menos en algunos países).

1.2.1 Cambio de normas: las inversiones responsables y el comportamiento empresarial

En esta etapa de la evolución, el subcampo de la inversión responsable y el comportamiento empresarial implica, principalmente, difundir la idea de que el sistema fiscal debería ser más transparente. La transparencia fiscal debería reducir la evasión fiscal corporativa, sobre todo en el caso de las multinacionales. Teniendo en cuenta que el impuesto sobre las sociedades representa una parte considerablemente mayor de los ingresos de los gobiernos de los países en desarrollo (el 16 % aproximadamente) en comparación con los países de la OCDE (en torno al 8 %), el cambio en estas normas en particular tiene potencial de actuar enormemente a favor del desarrollo.

The B-Team es uno de los principales actores en este subcampo de la TPA. Se trata de un colectivo de empresas y líderes de la sociedad civil que unieron fuerzas tras la crisis económica mundial del 2008, con el fin de luchar contra lo que, según ellos, iba mal en la cultura corporativa, incluyendo el cortoplacismo y la primacía de los accionistas.

Tras ponerse de manifiesto que los enfoques tradicionales no fomentaban la confianza entre las empresas y la sociedad, el ámbito de la TPA empezó a centrarse en abogar por un régimen del impuesto de sociedades más responsable. Uno de los principales factores que contribuyeron a esta desconfianza fue la visibilidad cada vez mayor de la práctica generalizada de la evasión fiscal corporativa y el reconocer que la manera en la que se había erigido el sistema impositivo internacional ha permitido que las empresas (en especial las multinacionales) engañen al sistema, exploten los vacíos y, como resultado, se reduzcan sus obligaciones fiscales.

Esto ha impulsado la formulación de una serie de principios fiscales responsables por parte de The B-Team, junto con organizaciones de la sociedad civil, inversionistas, instituciones internacionales y nueve multinacionales. Transcurridos tres años de la publicación de estos principios, se empiezan a atisbar cambios en las normas. El hecho de que muchos inversionistas importantes estén empezando a considerar las prácticas

fiscales de las multinacionales como un factor de riesgo y esto los lleve a exigir una conducta corporativa más responsable es realmente alentador. Un intelectual explicó lo siguiente:

«Cada vez vemos más inversionistas importantes y tradicionales que se están dando cuenta de que las cuestiones fiscales suponen un gran riesgo que debe incorporarse a sus estrategias de inversión. Cuando se destapa a una empresa como evasora de impuestos, el riesgo para su reputación es enorme. Asimismo, conlleva un riesgo financiero, ya que si las autoridades fiscales cuestionan las posiciones tributarias de la empresa, esta podría terminar pagando una suma importante de impuestos. Cada vez hay más inversionistas que afirman que la fiscalidad está vinculada con un riesgo contextual, pues son los impuestos lo que, al fin y al cabo, financian las sociedades modernas y funcionales a las que todos aspiramos y de las que, sin duda, dependen las empresas. Para funcionar, necesitan infraestructura y personal capacitado, sin olvidar un sistema de salud que cubra las necesidades de sus empleados. Consecuentemente, los inversionistas han aumentado las expectativas con respecto a las empresas».

En la actualidad, 20 multinacionales siguen los principios fiscales responsables, y se está trabajando para que esta cifra ascienda, mejorando así la aplicación de los principios. Ahora, sabedoras de que adherirse a los principios redundará en su propio beneficio, son las mismas empresas las que se ponen en contacto con The B-Team que, al principio, tenía que convencer a las sociedades para que los adoptaran.

Más allá de establecer y cambiar normas, la ambición en este subcampo gira en torno a crear algún tipo de coalición informal para la incidencia, formada por estas multinacionales, que inste al cambio de las reglas, es decir, que presione a los gobiernos para exigir legalmente que todas las empresas adopten algunas de las conductas responsables que otras ya ponen en práctica de manera voluntaria.

«Con el tiempo, podremos trabajar en la incidencia con este grupo de empresas y creo que esto será sumamente útil. Una de las razones más importantes por las que el cambio de reglas/legislación en materia fiscal es complicado, en particular en lo que respecta a la transparencia tributaria, es porque las empresas se oponen al mismo. Ahora, hay un grupo de empresas que lo están haciendo voluntariamente y lo mejor es que todos los argumentos que las empresas empleaban contra la transparencia (por ejemplo, que esta socava la competencia y que es increíblemente costosa desde el punto de vista administrativo) se están desmoronando al demostrar que sí es posible».

1.2.2 Cambio de reglas: la gobernanza de los recursos naturales

La transparencia y la participación ciudadana se consideran fundamentales para garantizar que la riqueza generada por los sectores extractivos contribuye al crecimiento y a la reducción de la pobreza.

En el caso de las iniciativas emprendidas en este subcampo de la TPA, la teoría de cambio sostiene que la sociedad civil y los ciudadanos utilizarán la información sobre contratos, ingresos y pagos del sector público relacionados con los sectores extractivos para que los gobiernos rindan cuentas de sus decisiones en materia de gasto público y en aras de la integridad.

De igual modo, si cuentan con la información adecuada, los ciudadanos harán uso de la misma para que las empresas de las industrias extractivas rindan cuenta de sus acciones, incluyendo cómo contribuyen, o no, a las comunidades afectadas por su presencia (Banco Mundial, 2016).

Desde principios de los años 2000, las iniciativas y los actores de la TPA, incluyendo «Publica lo que pagas», la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y el Natural Resource Governance Institute (conocido anteriormente como el Revenue Watch Institute), han conseguido cambiar las normas con respecto a la transparencia en el sector extractivo.

Ahora, más de 50 países elaboran informes detallados de acceso público sobre los ingresos que reciben los gobiernos provenientes del petróleo, el gas y la minería (Gaventa, 2019). Esto no es precisamente una nimiedad, sobre todo teniendo en cuenta

que las conversaciones sobre la gobernanza en las industrias extractivas en numerosos países eran, hasta la fecha, un tema tabú y sumamente delicado.

Los esfuerzos para fomentar la TPA en el área de la gobernanza de los recursos naturales comenzó con un énfasis especial en la transparencia de los ingresos (lo que reciben los gobiernos y lo que pagan las empresas). Las OSC, por su parte, utilizaron el discurso de «la maldición de los recursos»: ¿por qué es tan pobre la población de unos países tan ricos?

En la actualidad, este subcampo cubre la totalidad de la cadena de toma de decisiones del sector extractivo, desde la decisión de iniciar la explotación, los contratos, la legislación, los sistemas de gestión de la recaudación de ingresos y el desarrollo sostenible. Más recientemente, la EITI también ha empezado a ir más allá de ese vínculo directo con la gobernanza de las industrias extractivas, incluyendo cuestiones de igualdad de género y la transición energética.

Tras cosechar buenos frutos en el cambio de normas relativas a la TPA en los sectores extractivos, este subcampo ha progresado en muchos países, llegando a poner en marcha políticas y reformas institucionales y legales.

Sin embargo, esta segunda fase del cambio de reglas ha sido complicada. Los sectores extractivos no solo son un poderoso grupo de presión empresarial que obstaculizaría la aprobación de cualquier cambio que se considerara desfavorable para las sociedades extractivas sino que, además, es probable que incluso los gobiernos tengan razones de peso para oponerse a la reforma.

De hecho, el control sobre el sector de los recursos naturales se considera uno de los activos más valiosos disponibles desde el punto de vista político, en especial en países más pobres (Smith y Rosenblum, 2011). Como expuso un intelectual:

«En este campo, una de las limitaciones que debe tenerse en cuenta es el hecho de que la gobernanza de los sectores extractivos no puede separarse del estado general de democracia. En algunos países africanos, hay dirigentes que han permanecido en el poder durante décadas como consecuencia directa del uso que podían hacer de los sectores extractivos para fines políticos. De este modo, es posible que cualquier cambio que se quiera realizar en este sector sea complicado desde el punto de vista político, sobre todo en África, donde la misma subsistencia de

muchos regímenes se reduce a su participación directa en las industrias extractivas».

Esta importancia política ha desembocado, en cierto grado, en acciones de pura fachada, con leyes de transparencia que se formulan y promulgan pero no se ratifican, no se aplican, ni se hacen cumplir (lo que produce las llamadas lagunas en la implementación, tal y como se expuso en la sección 2 del presente informe). Algunos gobiernos se han adherido a la EITI por el mero hecho de ganar popularidad entre ciudadanos y donantes (Sovacool y Andrews, 2015). Estos contextos se caracterizan, naturalmente, por la lentitud a la hora de avanzar realmente en el campo de la TPA.

En este entorno de economía política, el poder podría encaminarse hacia la buena gobernanza si las organizaciones de la sociedad civil fueran capaces de formar grandes coaliciones y movilizar a una masa crítica de personas e instituciones que respalden la causa.

En cuanto a los donantes, la naturaleza política de los esfuerzos necesarios en esta segunda etapa debería conllevar que los donantes reacios al riesgo vayan con pies de plomo. Quienes pretenden brindar apoyo a los subcampos en esta etapa de su evolución deberían trabajar con ahínco en entender la economía política de estos subcampos en los países que respaldan.

La investigación publicada recientemente por International Budget Partnership sobre la política de la reforma fiscal (Lakin, 2020) es un paso certero hacia la dirección adecuada que podría reproducirse en otros subcampos de la TPA, incluyendo la gobernanza de los recursos naturales. La investigación publicada recientemente por International Budget Partnership sobre la política de la reforma fiscal (Lakin, 2020) es un paso certero hacia la dirección adecuada que podría reproducirse en otros subcampos de la TPA, incluyendo la gobernanza de los recursos naturales.

1.2.3 Conseguir que funcione en la práctica: la reforma de la contratación pública

La contratación pública representa aproximadamente el 50 % del gasto total de los gobiernos de países de renta baja y media, situándola como uno de los mayores riesgos de corrupción. De hecho, más de la mitad (57 %) de los 427 casos de cohecho examinados de conformidad con la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE consistieron en sobornos pagados para obtener contratos públicos (Amin, 2017).

Para remediar este problema, garantizar la imparcialidad y una relación óptima costo-efectividad, hay países que han realizado varias reformas con el objetivo de aumentar la transparencia y la apertura en la contratación pública.

La contratación pública abierta se apunala en la hipótesis de que cuando los gobiernos dan a conocer la información sobre la contratación pública, la competencia entre las empresas para hacerse con los contratos puede darse en pie de igualdad y la sociedad civil puede monitorear el proceso de identificación y cuestionar irregularidades como, por ejemplo, la corrupción y la captura del Estado (Amin, 2017).

La Open Contracting Partnership ha desempeñado un importante papel en el establecimiento de normas en este subcampo de la TPA, de la mano del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, que han refrendado numerosos países a través de la Alianza para el Gobierno Abierto (en forma de compromisos en sus planes de acción nacionales). Varios países apoyaron públicamente el Estándar durante la Cumbre Global Anticorrupción celebrada en Londres en 2016.

Algunas iniciativas de transparencia en la contratación pública han captado atención internacional, impulsando el progreso en este subcampo. Por ejemplo, la iniciativa ucraniana ProZorro, desarrollada en estrecha cooperación entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, obtuvo reconocimiento internacional tras ganar el World Procurement Award en 2016 (Bugay, 2016).

Recientemente, en 2020, una iniciativa de transparencia en la contratación pública se alzó con el galardón dedicado a los proyectos contra la corrupción en una competición organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este proyecto, titulado Public Procurement Corruption Risks: Big Data for Better Fiscal Growth (Riesgos de Corrupción en la Contratación Pública: Uso de los Macrodatos para un Mejor Crecimiento Fiscal), supuso la creación de una herramienta de inteligencia que utiliza macrodatos para detectar los riesgos de corrupción en los procesos de contratación pública.

«Gracias a los esfuerzos realizados por la sociedad civil, Nigeria cuenta ahora con un buen marco jurídico para la transparencia en la contratación pública. Se trata de una ley consolidada que se emplea en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, el problema es que no sabemos si esto ha tenido consecuencias a la hora de conseguir que la contratación pública sea más eficaz y menos propensa a la corrupción. Ahora, lo necesario es monitorear la contratación pública, haciendo especial hincapié en la manera en que se ejecutan los contratos públicos. Sobre el papel, es posible que estos contratos parezcan correctos y que hayan seguido el procedimiento adecuado, sin embargo, si se ejecutan de forma discrepante a lo estipulado en el contrato, probablemente no tendrán los

resultados esperados ni ofrecerán una buena relación coste-beneficio».

Al igual que sucede con la transparencia y el monitoreo presupuestarios, las OSC profesionalizadas de este espacio carecen de la capacidad y legitimidad necesarias para asumir la responsabilidad del monitoreo. En su lugar, esto debe llevarse a cabo a un nivel mucho más localizado.

Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este subcampo desempeñarán, más bien, el papel de facilitadoras, lo cual puede abarcar la capacitación de monitores comunitarios, la prestación de servicios tecnológicos (por ejemplo, la digitalización de la información sobre monitoreo) y la traducción de información relacionada con los contratos a los idiomas locales.

1.2.4 El progreso incierto de la responsabilidad social

«Se cree que la responsabilidad social es una respuesta de los gobiernos ante la presión de la sociedad civil, sin embargo, en los últimos años, el cambio radica en la aparición de un grupo de gobiernos que no se quedan a la espera de la presión de la sociedad civil para reconocer la responsabilidad social, sino que la utilizan de manera proactiva como parte de su sistema de rendición de cuentas. Se trata de una tendencia interesante a la que debemos prestar atención».

Esto es lo que afirmó uno de los intelectuales entrevistados. La responsabilidad social (con un énfasis especial en la salud) es una forma de intervención participativa de los ciudadanos. Da por sentado que los ciudadanos son quienes se ven afectados, en última instancia, por las decisiones en materia de salud y, por lo tanto, son quienes deberían repercutir en las modificaciones de las políticas y los servicios de salud, así como en la conducta de los profesionales de la salud mediante una influencia y acción colectivas (Danhoundo et al., 2018).

Las actividades para impulsar la responsabilidad social en materia de salud pueden emprenderse en todo el ciclo presupuestario, empezando con una presupuestación participativa, seguida del monitoreo de los servicios de salud (para garantizar que las políticas y los presupuestos se ejecutan según lo previsto) y, por último, implicando a los ciudadanos en el proceso de auditoría mediante auditorías sociales, compartiendo información con la Entidad Fiscalizadora Superior.

La responsabilidad social cobró impulso durante la tercera ola de democratización a principios de los 90, en una época en la que abundaba esa energía cívica que abogó por la democracia y los derechos democráticos. Además, en aquel momento muchos países se encontraban en el proceso de formular programas de descentralización, para los que era lógico y natural contar con la participación ciudadana. A principios de los años 2000, el Banco Mundial incorporó la participación ciudadana a su agenda de rendición de cuentas, con el objetivo de facilitar una rendición de cuentas de las instituciones públicas impulsada por los ciudadanos, además de la intervención cívica básica.

La pregunta es, ¿dónde fue a parar este subcampo de la TPA tras la primera etapa del cambio de normas?

A pesar de gozar de una dilatada historia, sería correcto decir que nunca llegó a institucionalizarse como otros subcampos de la TPA (etapa 2: cambio de reglas).

Por otra parte, hay componentes individuales de este subcampo que claramente sí se han institucionalizado –incluyendo la presupuestación participativa y la auditoría social– en diferentes lugares del mundo (Mills, 2016). Ahora, está surgiendo una tendencia interesante: son los mismos gobiernos quienes impulsan la responsabilidad social.

El intelectual citado al inicio de este artículo describió el papel pionero del Gobierno de Ghana en esta tendencia. Concretamente, el Gobierno creó la Dirección para la Responsabilidad Social en el Ministerio de Gobiernos Locales, con mandato para conectar al Gobierno central con los Gobiernos locales y la sociedad civil. El hecho de que el Gobierno invierta en esta función demuestra el valor que atribuye a que la práctica de la responsabilidad civil forme parte de su ecosistema de rendición de cuentas.

El Gobierno de Ghana (y sus ministerios competentes) valora la responsabilidad social por su habilidad de subsanar las lagunas existentes en la capacidad gubernamental para monitorear con eficacia la prestación de servicios a nivel local y la aplicación de las políticas. Durante una entrevista en septiembre de 2019, un representante del sector de la salud de Ghana lo describió de la siguiente manera:

«Hay tantos proveedores de servicios de salud que no tenemos la capacidad de monitorear y supervisar lo que sucede. Por eso son tan importantes [los proyectos en materia de responsabilidad social]. Nos ofrecen mucha información sobre la comunidad que, a su vez, utilizamos en nuestras deliberaciones sobre políticas. Además, son útiles para exigir la rendición de cuentas de los gobiernos mediante el análisis de cómo se usan, en la práctica, los fondos que el gobierno invierte en la prestación de

servicios de salud... Asimismo, permiten que las OSC reciban respuestas sinceras de los ciudadanos, algo que en el Gobierno no siempre solemos conseguir. (Mills, 2019)»

Es interesante señalar que hay gobiernos que no destacan por ofrecer a las OSC demasiado margen de maniobra respecto a otros aspectos de la TPA y que, sin embargo, se encuentran entre los que han comenzado a institucionalizar las actividades de responsabilidad social.

El Gobierno de Ruanda, por ejemplo, estableció una estructura rígida para sus relaciones con la sociedad civil y, pese a ello, ha desarrollado un marco para que las OSC puedan monitorear la contratación pública en el sector agrícola, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas en los recursos gubernamentales de este sector. El caso de Uganda es similar: un país caracterizado por una ausencia generalizada de liberalismo en el que algunas estructuras gubernamentales han mostrado un gran compromiso con la responsabilidad social, lo cual se manifiesta especialmente en el monitoreo de los contratos públicos por parte de los ciudadanos.

2. TENDENCIAS DE FINANCIAMIENTO

- Cambios internacionales y regionales en el financiamiento
- Cambios en las estrategias de los financiadores

Se han adaptado artículos extraídos de un informe no publicado sobre las tendencias mundiales en el ámbito de la transparencia, participación y rendición de cuentas (TPA, por sus siglas en inglés), redactado para complementar un análisis del panorama de la TPA realizado por OTT Consulting con el objetivo de sustentar la nueva estrategia de concesión de subvenciones de la Hewlett Foundation. La autora es Linnea Mills. El análisis se basa en datos, documentos de financiadores, otros informes y una serie de conversaciones semiestructuradas con 16 financiadores y personal de las redes de donantes. Además, recurre a fuentes de datos que demuestran la escala y las tendencias, en concreto el Sistema de Notificación por parte de los Países Acreedores del sistema del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. [Más información sobre el alcance, la metodología y los datos.](#)

2.1 La COVID-19 y el financiamiento de la TPA

La COVID-19 puede haber supuesto una reducción del financiamiento a cuestiones relacionadas con la TPA.

Los entrevistados no observaron grandes cambios en 2019 respecto a las tendencias de 2018, lo cual parece corroborarse con los datos iniciales del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) (OCDE/CAD, 2020). En 2020, la ayuda internacional al desarrollo (AID) aumentó en 10 mil millones de dólares estadounidenses como consecuencia del apoyo brindado como consecuencia de la COVID-19 (OCDE/CAD, 2021), a pesar de los significativos recortes del Reino Unido.

Aunque los desembolsos globales ascendieron, muchos donantes bilaterales han tenido que hacer frente a dificultades con sus programas, teniendo que reorientar recursos para responder a la situación sanitaria y las consecuentes crisis en los medios de subsistencia, la educación y otras áreas (Grupo de Trabajo sobre Estadística del CAD/OCDE). Además, tuvieron que postergar actividades difíciles de llevar a cabo en tiempos de pandemia. Entre otras complicaciones derivadas de la COVID-19 se incluyó la dependencia adicional de los socios locales y un mayor hincapié en enfoques digitales (OCDE, 2020).

Algunos países y bloques (como Canadá, Alemania y Francia) han mantenido o aumentado su AID. Sin embargo, se teme que la AID no haya aumentado lo suficiente como para atajar la crisis. Además, inquieta la posible llegada de más recortes, incluyendo la reducción de AID en países con un ingreso nacional bruto (INB) inferior, con el fin de equiparar su compromiso con un porcentaje del INB.

Puede que algunos gobiernos donantes reduzcan el gasto público más adelante, en un intento de frenar su creciente deuda pública. El análisis de EURODAD, que aborda el período posterior a la crisis financiera internacional del 2008, sugiere que, incluso si ahora mismo los donantes bilaterales no están haciendo recortes, podrían aplicarlos de aquí a unos años (Van de Poel, 2020). Esto podría conllevar que otros gobiernos bilaterales cambien sus estrategias (como está haciendo el Reino Unido) pero, por ahora, ningún otro país ha optado por esta vía de reducir su compromiso con la AID en base a su INB.

Para las entidades filantrópicas, la COVID-19 ha conllevado un énfasis en la salud y la respuesta directa a la crisis

Un estudio sobre la respuesta de las entidades filantrópicas de Estados Unidos a la COVID-19 reveló que la mayoría tenía previsto aumentar su gasto centrándose, principalmente, en servicios de salud, justicia social, recuperación económica y otras respuestas (Dalberg, 2020). Los asuntos relacionados específicamente con el campo de la TPA no figuraron en un lugar prominente.

Dalberg observó además una tendencia similar entre las entidades filantrópicas africanas en su respuesta a la COVID-19, ya que también aumentaron el financiamiento destinado a la salud, la seguridad alimentaria y asuntos económicos (Mwangi, Tsan, y Tweed, 2020).

En teoría, un aumento del financiamiento a la salud podría desembocar en un incremento de los fondos para algunas cuestiones del campo de la TPA, como la responsabilidad social en materia de salud. Muchos agentes sobre el terreno han participado en ponencias y han escrito sobre la responsabilidad social durante la pandemia (Alianza para el Gobierno Abierto, 2020), pero sigue sin quedar claro si los financiadores están implicados y de qué manera. La TPA todavía no parece formar parte del financiamiento de las vacunas, a juzgar por el caso omiso al llamamiento a suspender las patentes.

Las instituciones financieras multilaterales han aumentado su financiamiento durante la crisis

El compromiso de los donantes multilaterales durante la crisis ha superado con creces el de los donantes bilaterales. Según análisis preliminares, los compromisos bilaterales cayeron un 17 % en 2020 en comparación con 2019, mientras que los compromisos de las instituciones financieras multilaterales (IFM) aumentaron en un 31 % (Dodd, Breed, y Coppard, 2020).

Para muchas IFM, estos esfuerzos extraordinarios fueron fruto de una consignación anticipada de presupuestos futuros. De este modo, necesitarán reposiciones antes de

continuar con su gasto más adelante. Las IFM están financiadas por países accionistas, por lo que esto podría conducir a una reducción del gasto más adelante si las reposiciones son insuficientes para mantener los niveles actuales.

Debido a los retrasos experimentados, el Banco Mundial está bajo presión para que incremente sus desembolsos hasta alcanzar los más de 100 mil millones de dólares estadounidenses a los que se comprometió para responder a la COVID-19 (Duggan et al., 2020).

Una forma de acelerar este proceso es concediendo préstamos a Gobiernos sin exigir una preparación exhaustiva de proyectos como apoyo presupuestario. Si bien el Banco Mundial está adoptando cada vez más aspectos de la agenda de TPA, esto depende de las negociaciones con los países clientes y la presión constante de los donantes. Muchos analistas y activistas están muy pendientes de estos préstamos en aras de una transparencia y rendición de cuentas adecuadas.

El Fondo Monetario Internacional ha sido de las organizaciones más rápidas en proporcionar algunos de los paquetes de respuesta a la crisis de la COVID-19. No obstante, muchos activistas se inquietan por las condiciones de austeridad que implican las medidas de emergencia, ya que podrían obstaculizar el control democrático sobre el gasto presupuestario a medio y largo plazo (Jones, 2020). Además, los activistas destacan que un tercio de los países «no han sido capaces de comprometerse a realizar auditorías para sus gastos vinculados a la COVID-19» (Daar & Tamale, 2020).

2.2 Cambios internacionales y regionales en el financiamiento

Ligero aumento del financiamiento para la gobernanza internacional

Según el CAD, el financiamiento internacional destinado a la gobernanza ha experimentado una ligera subida, pasando de 19 mil 500 millones de dólares estadounidenses en 2015 a 22 mil millones de dólares estadounidenses en 2018.

La proporción de este financiamiento para la gobernanza procedente de donantes bilaterales miembros del CAD (los mayores donantes bilaterales, excluyendo a China) también aumentó de 11 mil millones de dólares estadounidenses en 2015 a 13 mil millones de dólares estadounidenses en 2018, lo cual corresponde al 10 % de los desembolsos generales en AID (Red sobre Gobernanza del DAC).

El financiamiento para la gobernanza en el África subsahariana es sólido, según datos del CAD

En líneas generales, el África subsahariana (ASS) y Asia meridional y central reciben la mayor parte del financiamiento en comparación con otras regiones. En cuanto a las

tendencias, el financiamiento para la gobernanza subió en ASS, Oriente Medio, Europa y América del Sur desde 2015. Por otra parte, el financiamiento para la gobernanza descendió considerablemente en el Caribe, América Central y Asia oriental en 2018.

En 2019, los cinco países que más se beneficiaron del financiamiento para la gobernanza en ASS fueron:

- Kenia (400,6 millones de dólares estadounidenses de todas las fuentes)
- Nigeria (308,1 millones de dólares estadounidenses)
- Etiopía (271,9 millones de dólares estadounidenses)
- Níger (231,0 millones de dólares estadounidenses)
- Uganda (196,0 millones de dólares estadounidenses).

Algunos financiadores, incluyendo Alemania y la UE, han pasado a centrarse en África (Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Alemania, 2017) (Comisión Europea, 2020).

La región del Sahel, en particular, también ha recabado una mayor atención como consecuencia de los conflictos, la crisis humanitaria y un aumento de las migraciones de refugiados (Alianza del Sahel, 2020) (Comisión Europea, 2020).

Los analistas llevaban mucho esperando (e incluso alentando) a que los donantes redujeran su financiamiento concesional a países de renta media estables como Ghana y Senegal. Tanto analistas como financiadores se han planteado pasar a otros modelos de asociación, como el aprendizaje entre iguales (Provost, 2014) (Steensen, 2014). Sin embargo, en el caso concreto de Ghana y Senegal, la AID no descendió entre 2015 y 2019.

Los entrevistados señalaron que Ghana, Senegal y Kenia siguen siendo centros neurálgicos en la región, es decir, lugares donde los financiadores establecen sus oficinas y desde los que desarrollan programas regionales. Esto produce un efecto de red, y las entidades en estos países reciben más fondos que las de otros países.

La mayoría de los filántropos africanos no están interesados en la TPA

La mayoría de los filántropos africanos no están interesados en financiar iniciativas relacionadas con la TPA, según un estudio reciente de Bridgespan (Schwier, Wallington, Holland, y Magoronga, 2020). Quieren evitar asuntos que entrañen riesgos desde el punto de vista político y, por consiguiente, definen a sus donaciones como ayuda para hacer frente a las «necesidades básicas», como la reducción de la pobreza y del hambre, la salud y la educación. Esto concuerda con los hallazgos de un estudio anterior sobre el financiamiento a los grupos de reflexión en países en desarrollo (Lah, 2017), que también concluyó que las entidades filantrópicas en estos países suelen centrarse en temas

convencionales de la donación caritativa o temas relevantes para sus negocios como, por ejemplo, el emprendimiento.

2.3 Tipos de organizaciones financiadas

Los gobiernos de los países en desarrollo son los principales beneficiarios del financiamiento internacional

Los gobiernos receptores reciben más financiamiento que cualquier otro tipo de organización, ya que los donantes bilaterales y multilaterales suelen trabajar con ellos. La ayuda a través de gobiernos receptores se redujo ligeramente en 2018.

Los otros cuatro tipos de organizaciones que suelen recibir fondos son: organismos donantes gubernamentales, ONG de países donantes, instituciones de las Naciones Unidas y otras entidades multilaterales. En 2018, los donantes bilaterales del CAD incrementaron el financiamiento en comparación con 2015 a través de sus propios gobiernos y el sector privado.

Aumento del financiamiento para las ONG

Las ONG experimentaron un aumento en su financiamiento, incluyendo una ligera subida en los fondos destinados a ONG situadas en países en desarrollo. Sin embargo, las ONG que dependen de las contribuciones de los donantes siguen recibiendo el grueso del financiamiento otorgado al sector benéfico, mientras que el financiamiento a las ONG situadas en países en desarrollo aumentó partiendo de un nivel inferior. El financiamiento para las ONG internacionales registradas (que pertenecen a una categoría diferente, a pesar de que suelen tener su sede en el hemisferio norte y establecer numerosas oficinas regionales y nacionales) también experimentó cierta subida.

Los entrevistados sugirieron que las entidades filantrópicas y algunos donantes bilaterales se plantean con mayor frecuencia la posibilidad de financiar directamente a las organizaciones locales de la sociedad civil. Sin embargo, todavía no queda claro cuántos presupuestos e inversiones han cambiado en la realidad.

Algunos entrevistados comunicaron cambios en su financiamiento, en perjuicio de organizaciones del hemisferio norte y a favor de organizaciones regionales o nacionales. USAID también ha tomado este derrotero, como demuestra la puesta en marcha de la New Partnership Initiative, encaminada a fomentar que «USAID mejore la diversificación de los socios con los que trabaja, incluyendo organizaciones locales en países socios» (Maloney, 2020). Desde el Gobierno de Obama, USAID ha intentado realizar más adjudicaciones a nivel local, por lo que es probable que, con la Administración de Biden, se siga trabajando en esa dirección. A pesar de esto, el financiamiento o el intento de financiar a organizaciones locales no es una tendencia

uniforme entre los donantes bilaterales y las entidades filantrópicas. Algunos financiadores bilaterales tienen otra perspectiva, a juzgar por sus documentos de estrategia.

Otros entrevistados afirmaron que se hacía más hincapié en mejorar el financiamiento mediante las coaliciones, asociaciones, redes y ONG internacionales. Además, hicieron referencia a la copropiedad y a mejorar la manera en que se ayuda a los beneficiarios secundarios mediante una asociación norte-sur. Algunos empleados de entidades filantrópicas debatieron sobre esta opción debido a la ausencia de una presencia nacional que facilite la concesión de subvenciones directa.

Las grandes entidades filantrópicas africanas siguen sin constituir una fuente de financiamiento importante para las ONG locales

Las grandes entidades filantrópicas ubicadas en África suelen donar principalmente dentro de sus propios países, según un estudio reciente de Bridgespan, pero, por lo general, no a las ONG (Schwier, Wallington, Holland y Magoronga, 2020).

Los beneficiarios de su financiamiento son, predominantemente, el sector público (como los hospitales públicos y los programas gubernamentales) y sus propias fundaciones, y solo el 9 % se destina a las organizaciones locales.

Cambios en las estrategias de los financiadores

Sucesos que están cambiando el mundo: los financiadores están alerta pero el camino es incierto

Habida cuenta de los trágicos acontecimientos en 2020, ha sido difícil obtener una visión de conjunto completa de todos los cambios que están efectuando los donantes. La COVID-19 no ha sido lo único que ha agitado este período, no debemos olvidar las diferentes elecciones, la internacionalización del movimiento Black Lives Matter, las inminentes crisis de deuda, etc. De este modo, es complicado predecir qué va a suceder. Muchos empleados de los financiadores siguen procesando todos estos cambios y, entre otras cosas, están trabajando en la formulación de discursos que expliquen lo que está sucediendo.

Algunos de los entrevistados consideran que la COVID-19 podría conllevar un mayor énfasis en la gobernanza, ahora que los ciudadanos son conscientes de la importancia que tiene esta en tiempos de crisis. El creciente interés del sector empresarial en cuestiones sociales podría influir en los gobiernos. Además, en muchos países, los jóvenes tienen expectativas diferentes sobre el Gobierno y las nuevas formas de trabajar y de utilizar la tecnología.

Algunos observan que hay más gobiernos que están limitando el espacio cívico y las prácticas democráticas debido a la COVID-19 (International IDEA, 2020), lo cual podría desencadenar reacciones futuras. La transparencia por sí misma no ha sido suficiente, ya que los gobiernos saben «cómo utilizarla a su favor», por lo que es posible que los financiadores reorienten su atención a los derechos esenciales, así como a abordar la desinformación.

A pesar de esto, otros entrevistados no esperan que la COVID-19 suponga grandes cambios para la TPA. Si los financiadores se centran en otros temas, las tendencias anteriores que apuntaban a un aumento del autoritarismo podrían continuar.

Los donantes bilaterales renuevan su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho, contrarrestado por el recorte del Reino Unido en la AID, un gran problema para este campo

Algunos donantes bilaterales (incluyendo a la UE, Dinamarca, Alemania y Suecia) siguen concentrados en la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho, como consecuencia de las inquietudes sobre el retroceso democrático y las tendencias antidemocráticas en todo el mundo.

La UE, por ejemplo, adoptó su Plan de Acción 2020-2024 para los Derechos Humanos y la Democracia y creará estrategias nacionales para los derechos humanos y la democracia en 2021 (Unión Europea, 2020). Suecia ha convocado a un grupo de Amigos en Defensa de la Democracia (Ministerio de Asuntos Exteriores, Suecia, 2020).

USAID sigue siendo uno de los principales financiadores de la democracia. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que su Administración convocaría una cumbre de democracias (Biden, 2019), lo cual apunta a un mayor énfasis en esta cuestión. El principal marco actual de USAID, el Camino a la Autosuficiencia (en inglés, Journey to Self-Reliance), incorpora numerosos elementos de la TPA, incluyendo una gobernanza abierta que rinda cuentas (USAID, ND).

Al mismo tiempo, el campo de la TPA en general ha aprendido que, en la democracia y la gobernanza, los enfoques prescriptivos son raramente apropiados. Un entrevistado dijo que este campo ha pasado a estar orientado hacia los problemas, determinado por el contexto, y a ser más iterativo. Las cuestiones relativas a la inclusión, la eficacia y la rendición de cuentas siguen en el punto de mira de los donantes bilaterales (Menocal y OCDE, 2020).

Sin embargo, no todos los donantes bilaterales están manteniendo su financiamiento. El Gobierno del Reino Unido anunció recortes importantes en la AID de su país. En un primer momento, este recorte se situaba en torno a los 2 mil 900 millones de libras esterlinas en 2020. En la segunda mitad de 2020, anunció otro recorte, con el que se

preveía una reducción del compromiso del Reino Unido con la AID del 0,7 % del INB al 0,5 % (Dickson, 2020). Se espera que la reducción total se encuentre en torno a los 4 mil 500 millones de libras estadounidenses en comparación con 2019 (Development Initiatives, 2021). Esto se produce tras la reciente fusión en el Gobierno del Reino Unido entre el Departamento de Desarrollo Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, que da origen al Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés).

Varios entrevistados comentaron que estos recortes eran sumamente preocupantes para las organizaciones del ámbito de la TPA, ya que el Reino Unido es uno de los principales financiadores de muchas iniciativas vinculadas a la TPA, incluyendo fondos fiduciarios clave con el Banco Mundial. En el momento en que se redactó este informe (febrero de 2021), algunas organizaciones ya habían recibido aviso de los recortes o se encontraban a la espera de recibir más información.

Las entidades filantrópicas: las nuevas incorporaciones escasean y evolucionan las entidades existentes

La Chandler Foundation ha sido el financiador más resaltado del campo de la TPA. Es el miembro más reciente de la Transparency and Accountability Initiative (TAI) y se centra en la lucha contra la corrupción. Por lo demás, prácticamente no se han incorporado más financiadores filantrópicos al espacio internacional de la TPA. Tal y como se mencionó, otras entidades filantrópicas que podrían ser pertinentes para el campo de la TPA son la Skoll Foundation, BHP Billiton Foundation y Laudes Foundation.

Otras entidades filantrópicas de envergadura, como la Bill & Melinda Gates Foundation, la Rockefeller Foundation y la Packard Foundation siguen centradas en otros enfoques y sectores, tales como la salud mundial y la innovación.

Las principales entidades filantrópicas centradas en la TPA abarcan diferentes objetivos y perspectivas sobre este cometido. Algunas se centran en la desigualdad, otras prestan más atención a los derechos digitales, mientras que otras están replanteándose su estrategia.

Un entrevistado destacó que la TPA puede parecer un campo «angosto y especializado», debido a la falta de coherencia a la hora de entablar conexiones con otros grupos de interés y sectores. «El lenguaje que utilizamos nos limita» y sigue siendo difícil informar sobre un área considerada menos tangible, en especial para los dirigentes de otras organizaciones de financiamiento.

La TPA goza de reconocimiento entre los donantes multilaterales, pero la ejecución no está tan clara

Los entrevistados sugirieron que el Banco Mundial ha evolucionado y ahora integra ciertos aspectos de la TPA en sus estrategias globales y algunas operaciones de préstamo (Banco Mundial, 2020). Además, promueve la transparencia presupuestaria y la contratación abierta, y hace un llamamiento a favor de la transparencia de la deuda.

No obstante, esta integración de la TPA podría ser más sólida en la estrategia global de gobernanza del Banco Mundial que en sus actividades en los países. Las instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial trabajan estrechamente con los gobiernos nacionales durante la concesión de préstamos a los mismos. El interés de los países en participar en asuntos relacionados con la TPA influye enormemente en las operaciones del Banco Mundial. Los esfuerzos a nivel nacional vienen también determinados por las propias oficinas del Banco Mundial en los países, cuyo interés en estos temas no es uniforme. Un entrevistado enfatizó que, para mantener la TPA en la agenda, se requiere financiamiento para este campo y que los donantes presionen al Banco Mundial.

Resulta menos claro en qué medida el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) está utilizando o promoviendo los enfoques de TPA basados en materiales *online*. El plan del Fondo Africano de Desarrollo (FAD) para sus reposiciones anteriores englobaban la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, la responsabilidad social, la participación ciudadana en las decisiones y el monitoreo, la movilización nacional de recursos y la gobernanza de los recursos naturales (Fondo Africano de Desarrollo, 2016).

Sin embargo, el FAD no ha dado a conocer documentos públicos correspondientes a la reposición más reciente, salvo convocatorias de reuniones y comunicados de prensa (Banco Africano de Desarrollo, 2019). El Instituto de Desarrollo Africano ha celebrado un evento sobre transparencia en la gestión de las finanzas públicas desde el estallido de la pandemia de la COVID-19, lo cual indica que sigue tratándose de un asunto importante (Instituto de Desarrollo Africano, 2020).

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura ha recibido críticas por cuestiones relacionadas con la TPA motivadas, en especial, por las salvaguardias (Horta y Wang, 2020). Al mismo tiempo, algunos países prefieren cooperar con este banco porque concede los préstamos con mucha más celeridad que otros bancos multilaterales de desarrollo.

Durante la COVID-19, el FMI ha recuperado su posición como uno de los principales financiadores a los países en desarrollo. El FMI ha progresado aumentando la transparencia sobre su propia documentación y ha promovido algunos de los temas que abarca la TPA y asuntos conexos, como la igualdad. Muchos activistas siguen

manteniendo que sus acciones siguen siendo insuficientes, incluyendo las consecuencias de las condiciones inherentes a sus préstamos.

2.5 Igualdad de género e inclusión social en las estrategias de los financiadores

Las entidades filantrópicas adaptan su enfoque para la igualdad de género y la inclusión social (GESI, por sus siglas en inglés) a sus objetivos, valores y culturas organizativos

Las organizaciones filantrópicas del ámbito de la TPA adoptan enfoques diversos y personalizados para la GESI y no suelen hacer tanta referencia a los instrumentos de derechos humanos como los órganos públicos de financiamiento. La manera de abordar la GESI varía en función de sus objetivos, valores y filosofía, los compromisos adoptados por los dirigentes, la manera en que gestionan y dotan de recursos a los esfuerzos en GESI, sus planteamientos y actividades, así como la aplicación de los principios de GESI a cuestiones internas.

Para entender esta diversidad, resulta más fácil agrupar a las entidades filantrópicas por su grado de compromiso formal para con la GESI, sus recursos y sus enfoques.

En un extremo del espectro, algunos financiadores afirmaron que solo atienden a desigualdades específicas cuando son relevantes para su objetivo general. Según esto, la GESI por sí misma no es un compromiso primario ni secundario. La manera en que abordan la GESI es informal y personalizada y cuenta con recursos mínimos. En lugar de establecer sus propios requisitos descendentes, estos financiadores tratan las cuestiones de GESI con los beneficiarios y, por lo general, respaldan las medidas de estos.

A medio camino se encuentran los financiadores que rehúsan la informalidad y están explorando o empezando a definir enfoques de GESI. Muchos están escogiendo algunos compromisos como punto de partida, algunos se centran en las relaciones con los intermediarios y beneficiarios desde una perspectiva de GESI, mientras que otros se preocupan más por asuntos relacionados con las salvaguardias (Hodal, 2019).

En el otro extremo del espectro, algunos financiadores cuentan con carteras formales en materia de GESI, a las que dotan de recursos, y aplican la GESI en todos los niveles de la organización. Un ejemplo de esto es la Ford Foundation, que tiene carteras de concesión de subvenciones para cuestiones de género, justicia étnica y racial y la inclusión de personas con discapacidad. Además, ha creado una herramienta de diversidad, igualdad e inclusión (Ford Foundation, ND) y una herramienta para la inclusión de personas con discapacidad (Ruble y LaVant, 2020).

La justicia racial en el mundo se convierte en un nuevo tema de interés para la mayoría de las entidades filantrópicas de Estados Unidos

La reacción de las organizaciones filantrópicas ante el movimiento Black Lives Matter no se ha hecho esperar, y muchas han anunciado un incremento del financiamiento para el activismo negro y los movimientos en favor de la justicia racial en EE. UU. (Schultz, 2020) (Candid, 2020).

Candid ha hecho un seguimiento de miles de millones en donaciones para los movimientos de justicia racial en Estados Unidos desde 2011, incluyendo más de mil millones de dólares estadounidenses de MacKenzie Scott y fondos asesorados por donantes de JPMorgan Chase, así como 885 millones de dólares estadounidenses de la Ford Foundation. La Hewlett Foundation se ha comprometido a hacer frente al racismo sistemático en Estados Unidos y se ha unido al Democracy Frontlines Fund, que «respalda a 10 organizaciones de primera línea seleccionadas por un grupo de cerebros formado por mujeres de color con una amplia experiencia en el financiamiento de movimientos sociales» (Libra Foundation, 2020). Estas organizaciones reciben fondos de uso no restringido plurianuales.

El debate público sobre la justicia racial y la «descolonización del desarrollo» se caracteriza por su dinamismo. Los activistas han sugerido diferentes maneras de responder a estos asuntos, incluyendo un énfasis en la diversidad en las plantillas y puestos de dirección, diálogos explícitamente sobre raza y desigualdades sistémicas, la amplificación de voces diversas, la provisión de financiamiento a organizaciones locales y a organizaciones dirigidas por personas negras, una concesión de subvenciones participativa, cuestionar los planteamientos coloniales y volver a examinar las prioridades (Batten, Jones, MacKrell, y Petit-Frere, 2020) (Lawrence y Fine, 2021) (Weisenfeld, 2020) (Baguios, 2020) (Cheney, 2020).

En comparación con los artículos y anuncios producidos como consecuencia del trabajo realizado en EE. UU., en la esfera internacional no abundaron las publicaciones sobre las medidas de justicia racial adoptadas por entidades filantrópicas.

En uno de los escasos artículos publicados sobre justicia social y filantropía a nivel internacional, Nicolette Naylor, directora de Programas Internacionales en la Ford Foundation, y Aleyamma Matthew, del Collective Future Fund, abordan cómo hacer frente a la violencia contra los negros que sufren mujeres y niñas, cómo promover la solidaridad internacional para conectar a las dirigentes negras y cómo «ir más allá de los fondos de respuesta rápida, adquiriendo un compromiso a largo plazo con las organizaciones dirigidas por negros, indígenas y mujeres de color» (Mathew & Naylor, 2020). Desde la publicación de este artículo, la Ford Foundation contribuyó al lanzamiento del Fondo Feminista Negro a nivel internacional (Ford Foundation, 2021).

La justicia racial ha figurado en otras publicaciones internacionales, incluyendo la convocatoria abierta del reto Racial Equity 2030 de la W.K Kellogg Foundation, con el que pretende fomentar la igualdad racial en todo el mundo con 90 millones de dólares estadounidenses (Kellogg Foundation, 2020). La Iniciativa de Derechos Humanos de la Open Society Foundations (OSF, por sus siglas en inglés) se centra en el albinismo en África y en asuntos relacionados con la apatridia (Open Society Foundations, 2020). Echoing Green lanzó un Fondo Filantrópico para la Igualdad Racial, con el que prevé respaldar el emprendimiento social y a líderes a nivel mundial (Brown, 2020). La actualización de las estrategias de los donantes bilaterales o multilaterales para incluir asuntos relacionados con la justicia racial fue objeto de incluso menos atención.

Los financiadores adoptan nuevas perspectivas de GESI: consulta, participación y flexibilidad

No existe una hoja de ruta en materia de GESI para las entidades filantrópicas. Los entrevistados aconsejaron que quienes empiezan a trabajar en cuestiones de GESI y/o diversidad, igualdad e inclusión deberían tomar sus valores como punto de partida y, luego, examinar los problemas específicos en sus campos y funciones. Asimismo, los entrevistados recomiendan que se esclarezcan los marcos, incluyendo menciones a filosofías o enfoques específicos, así como conseguir que la GESI sea responsabilidad de todos y no se aborde de manera aislada.

Se mencionaron dos ejemplos: el Equality Fund y The Other Foundation, que hacen gala de nuevos enfoques para la GESI en el ámbito de la filantropía.

El Equality Fund, un inversionista filantrópico y de impacto, llevó a cabo un proceso de consulta con movimientos feministas, en línea con la política exterior feminista de Canadá. Como resultado, formuló nueve principios, incluyendo un compromiso para «acabar con las relaciones patriarcales» y conceder un mayor poder a «mujeres, niñas, trans y no binarios». El fondo respalda el principio «nada sobre nosotros sin nosotros», y pretende satisfacer las necesidades inmediatas de las personas y cuestiones estructurales como «políticas, leyes e instituciones».

El Fondo se rige por estos principios para apoyar acuerdos flexibles y plurianuales, procesos más sencillos para la concesión de subvenciones, una mentalidad basada en el desarrollo de relaciones, la participación en colaboraciones, una consulta continua y asistencia para la seguridad y el bienestar (Equality Fund; Canadian Women's Foundation; Community Foundations of Canada, 2020).

The Other Foundation, que ayuda a personas LGBTQI+ en el sur de África, ha sido pionera en los enfoques participativos en la concesión de subvenciones. El consejo de la fundación pidió al público que «nominara a un panel de revisores *inter pares* para ayudar a revisar y evaluar las solicitudes de subvenciones». Las solicitudes se recibieron

OTT Consulting

a raíz de una convocatoria abierta y los revisores *inter pares* desempeñaron un papel esencial en la selección (Other Foundation, 2014).

3. INSTANTÁNEAS DE LA SITUACIÓN EN DIVERSOS PAÍSES

- Análisis minucioso de la TPA en Burkina Faso, Ghana, Kenia, Senegal y Tanzania
- Artículo de reflexión escrito por un profesional de la TPA en Kenia, Senegal y Uganda

Las instantáneas de la situación en diversos países se han adaptado de un informe no publicado sobre las tendencias nacionales en el ámbito de la transparencia, participación y rendición de cuentas (TPA, por sus siglas en inglés), redactado para complementar un análisis del panorama de la TPA realizado por OTT Consulting con el objetivo de sustentar la nueva estrategia de concesión de subvenciones de la Hewlett Foundation. Autores: Ajoy Datta y Fletcher Tembo. [Más información sobre el alcance, la metodología y las fuentes.](#)

3.1 Burkina Faso

Indicadores económicos, sociales y de gobernanza

El 71 % de la población de Burkina Faso está concentrada en zonas rurales. Su población se ha cuadruplicado desde su independencia, situándose por encima de los 20 millones en 2019 (Feng, 2015).

El país ha registrado un crecimiento lento pero constante de la renta per cápita desde su independencia en 1960, frenado únicamente por las frecuentes sequías que experimentan los países del Sahel.

Burkina Faso no ha experimentado una transformación estructural hacia una economía de orientación industrial, a pesar de los esfuerzos depositados (sobre todo en los 70), y los beneficios del crecimiento económico no se han repartido de manera inclusiva, a juzgar por las grandes desigualdades (Koussoubé et al., 2014).

Los índices de pobreza han permanecido, por lo general, inalterados (UNU WIDER, 2014). De hecho, el número absoluto de pobres aumentó en más de 2 millones entre 1994/95 y 2009 (Koussoubé et al., 2014).

Está clasificado como país menos adelantado: en 2017, Burkina Faso ocupó la 183^a posición de entre 189 países y territorios con una puntuación de 0,423 en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2018).

Los ciudadanos se quejan de problemas con infraestructura básica, como el agua, la educación (en especial la educación secundaria y superior) y la atención de salud (BTI, 2018). Solo el 20 % de la población tiene acceso a saneamiento.

Los ciudadanos percibieron una mejora general en la actuación del Estado en materia de salud, educación y servicios policiales (Afrobarómetro). A los ciudadanos, estos logros recientes pueden resultarles destacables, en especial, porque el listón de la actuación gubernamental estaba muy bajo (Bratton et al., 2019).

Los indicadores de gobernanza han permanecido estables en los últimos años:

- **Transparencia y rendición de cuentas:** puntuación de 45,7 sobre 100 en el Índice de Gobernanza en África de la Fundación Mo Ibrahim de 2020, sin presentar cambios durante los últimos cinco años.
- **Voz y rendición de cuentas:** el país obtuvo una puntuación de 39,9 sobre 100 en los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial de 2019 (una caída de 3 durante los últimos cinco años).
- **Barómetro Global de la Corrupción de 2019:** el 62 % de los ciudadanos coincidieron en que «las personas corrientes pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción» en Burkina Faso (un aumento de 1 % en los últimos cinco años).

Contexto político

Factores históricos y políticos

Burkina Faso, antigua colonia francesa, obtuvo su independencia en 1960 y fue gobernado, en un primer momento, por un régimen de partido único, en el que se sucedieron transiciones en el poder mediante el uso de la fuerza con golpes militares.

En 1987, Blaise Compaore derrocó a Thomas Sankara y gobernó durante 27 años a la cabeza del Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP, por sus siglas en inglés). La necesidad de distribuir rentas a miembros destacados de la coalición en el poder perjudicó con frecuencia las inversiones en sectores económicos y sociales.

A principios de la década de 2010, empezaron a aparecer síntomas de flaqueza en la coalición de Gobierno. Los soldados de las fuerzas armadas protagonizaron frecuentes protestas por el aumento de las desigualdades, mientras que los ciudadanos instaban cada vez más a que se instaurara la democracia y la rendición de cuentas, de la mano de una mejora de la alfabetización y la urbanización (Koussobe et al., 2014).

En 2014, Compaore fue derrocado en un alzamiento popular. Las elecciones presidenciales y legislativas llevaron al poder a Roch Marc Kabore, del Movimiento por el Pueblo y el Progreso (MPP, por sus siglas en inglés) (formado a partir del CDP), convirtiéndose así en el primer dirigente civil elegido formalmente.

La competencia política formal sigue siendo débil. El CDP y el MPP controlan a una amplia red de clientelismo, incluyendo a instituciones políticas y de la administración pública fundamentales. Esto otorga a los partidos un acceso a una cantidad considerable de recursos con los que pueden garantizar el éxito electoral.

De este modo, la reelección del presidente Kabore en noviembre de 2020 no fue en absoluto inesperada. De una población de 20 millones, 8 millones se inscribieron para votar y solo 3 millones votaron. Este desplome en la participación ciudadana es señal de la poca confianza que genera el sistema político formal.

«Los ciudadanos no creen en los dirigentes y están desencantados con la democracia, lo que los lleva a pensar que el liderazgo político es incapaz de ofrecer soluciones a los problemas más importantes. La gente cree más en los líderes tradicionales y religiosos, y quizás en algún líder de la sociedad civil».

(Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)

El presidente tiene la capacidad de ejercer un gran poder. En el Gobierno, el poder de decisión se concentra en gran parte en el poder ejecutivo y en el Gobierno central. La Asamblea Nacional carece de eficiencia y mecanismos de control, mientras que el poder judicial está, en la práctica, dominado y politizado por el poder ejecutivo.

Las fuerzas armadas pueden ejercer un poder considerable y los líderes religiosos ostentan una autoridad significativa. La crisis del golpe de Estado de 2015 fue una exhibición del poder militar en el país (BTI, 2018), mientras que las asociaciones musulmanas consiguieron impugnar reglamentos propuestos por el Gobierno para reforzar el laicismo, que incluía una prohibición de rezar en lugares públicos (Garda World, 2018).

Servicios públicos

En el ejecutivo, las decisiones sobre el presupuesto y los recursos humanos se toman de manera centralizada, por ejemplo, por el Ministerio de Economía y

Hacienda, el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mientras que el resto de los ministerios se encargan de la ejecución.

La descentralización fue concebida para acercar los servicios sociales y la administración a los ciudadanos. Sin embargo, la escasez de recursos financieros y técnicos han limitado gravemente la medida en que podría ejercerse cualquier tipo de autonomía local (Banco Mundial, 2015).

El Gobierno ha establecido un marco legal y normativo a fin de mejorar los servicios públicos, pero esto no se ha traducido en mejoras reales. La concentración centralizada de recursos financieros y humanos limita la capacidad de la administración de responder a las necesidades de los ciudadanos.

La poca capacidad para prestar servicios públicos esenciales se agrava por el hecho de que muchos trabajadores esenciales –como profesores y magistrados– ocupan puestos de dirección y administración en ministerios clave. Esto se refleja en las bajas puntuaciones obtenidas por el país en una serie de indicadores relativos al sector público y la gobernanza (Banco Mundial, 2015).

El papel de los agentes internacionales

Burkina Faso ha dependido en buena medida de los flujos de ayuda internacional, que representó el 8,7 % del ingreso nacional bruto del país en 2016 (OCDE, 2017). Sus donantes bilaterales más importantes son la Unión Europea, Francia, Alemania y los Estados Unidos.

Las instituciones internacionales establecen limitaciones a la formulación de políticas. Un ejemplo de esto es la política monetaria, establecida por el Banco Central de los Estados de África Occidental, mientras que la política fiscal debe tener en cuenta los marcos fijados por la Unión Económica y Monetaria de África Occidental y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. La gobernanza y la corrupción, por su parte, se encuentra bajo la supervisión de las instituciones de Bretton Woods.

Las presiones y los recursos de los donantes han sido trascendentes. Por ejemplo, a la hora de ayudar a aumentar el gasto público en la educación y la salud. Sin esto, es poco probable que el país hubiera experimentado tasas de crecimiento en la matriculación escolar tras 1990. Sin embargo, los donantes tampoco tienen vía libre, ya que la presión que pueden ejercer sobre el Gobierno es limitada (Koussoube, 2014).

Alentado por donantes internacionales, el Gobierno aprobó una ley contra la corrupción en 2015. A pesar de esto, la debilidad de las instituciones, una falta de información y una cultura de impunidad han resultado, frecuentemente, en prácticas

corruptas por parte de los funcionarios públicos (Portal contra la corrupción de GAN, 2016).

Industria

Dado que la población de Burkina Faso es, en su mayoría, de bajos ingresos, el principal mercado para aspirantes a empresarios se encuentra en las licitaciones públicas. Los empresarios vinculados al partido gobernante son los que tienen más probabilidades de beneficiarse, mientras que las pequeñas y medianas empresas a menudo tienen que recurrir a pagar sobornos para obtener contratos (Akouwerabou y Bako, 2013).

Además, las medidas gubernamentales de austeridad han resultado en huelgas, sobre todo entre los trabajadores del sector público, que se han intensificado con el desvío cada vez mayor de recursos para abordar la inseguridad nacional (Garda World, 2018).

Burkina Faso es uno de los 20 mayores productores de oro del mundo. En líneas generales, podría decirse que los recursos naturales no abundan en el país, pero sí que atesora unas reservas de oro considerables, responsables del 16 % de los ingresos del Gobierno en 2015 y del 65 % de las exportaciones totales del país.

Sin embargo, el Gobierno se ha visto obligado a reducir los tipos de impuestos sobre los beneficios para atraer a inversionistas extranjeros, con la consecuente disminución de los ingresos nacionales. Esto se debe a los costos de producción, que son relativamente altos por tratarse de un país sin litoral (Koussoubé et al., 2014).

La extracción de oro se ha expandido notablemente desde finales de los años 2000, y casi todas las minas han sido objeto de conflictos a nivel local entre las comunidades locales por una parte y, por otra, las fuerzas de seguridad del Estado y las compañías extractoras.

Su pertenencia a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) no ha comportado grandes repercusiones sobre las prácticas en el sector minero:

«No creo que la EITI haya supuesto grandes cambios para el sector minero de Burkina Faso... En mi opinión, el cambio real ha de provenir de los ciudadanos sobre el terreno, no del sistema internacional de iniciativas regionales. La gente corriente quiere sentir los beneficios reales del sector minero (por ejemplo, un porcentaje de las ganancias generadas por la minería), algo que no llega simplemente mejorando la transparencia en el sector. Considero que este tipo de iniciativas tampoco tienen un impacto real en los dirigentes políticos».

(Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)

Sociedad civil y participación ciudadana

La sociedad civil en Burkina Faso cuenta con un historial considerable, arraigado en la sociedad precolonial. Se trata sobre todo de *groupement villageois* (grupos de las aldeas) y otras organizaciones comunitarias (BTI, 2018).

Las organizaciones de la sociedad civil más profesionalizadas que se encuentran en zonas urbanas disfrutan formalmente de un abanico de libertades, como la libertad de expresión, garantizada por la Constitución (BTI, 2018).

Algunas ONG se han movilizadado contra la corrupción, creando la Red Nacional de ONG contra la Corrupción. Informan de una corrupción generalizada en diferentes ámbitos, como el servicio de aduanas, las agencias tributarias y las fuerzas del orden y sus efectos (GAN Integrity, 2016).

Los medios de comunicación disfrutan de un mejor entorno operativo desde las protestas masivas en 2014. Se ha despenalizado la difamación, la interferencia política en el organismo público de radiodifusión ha disminuido, así como la autocensura entre los periodistas. Sin embargo, los periodistas siguen sufriendo la presión de los funcionarios del Gobierno (Freedom House, 2018).

No obstante, la influencia de la sociedad civil en la política es limitada. Las OSC suelen actuar como asesores del Gobierno, abordando distintos problemas y mediando en conflictos, más que cuestionando sus acciones (entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020). Cuando las ONG cuestionan las cifras del Gobierno, sufren acoso en el desempeño de sus actividades (Freedom House, 2020).

Muchos ciudadanos no consideran que la sociedad civil represente sus necesidades y aspiraciones y estiman que tiene una relación demasiado cercana con la élite política:

«La reputación y la confianza en las organizaciones tradicionales de la sociedad civil se ha deteriorado a los ojos de los ciudadanos, quienes consideran que no se preocupan demasiado de las necesidades de la población. La gente tiene la misma desconfianza hacia las OSC y sus dirigentes que hacia los políticos. Llevan años viendo a los mismos dirigentes al mando de las OSC, y estos tienen una relación demasiado estrecha con la élite y la clase políticas».

(Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)

Los ciudadanos recurren, cada vez más, a la acción directa y a las protestas en las calles, una dinámica que el Gobierno ha tolerado parcialmente (Freedom House, 2020)

Las organizaciones juveniles menos formales han movilizad con eficacia a los jóvenes usando las redes sociales (entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020). Por ejemplo, los ciudadanos –sobre todo los jóvenes– protestaron contra Blaise Compaore sin la ayuda de las OSC formales. Sin embargo, al menos 14 civiles desarmados murieron por disparos durante las protestas contra el golpe de Estado de 2015 por la guardia presidencial, y muchos manifestantes fueron arrestados, lo cual rebaja la tolerancia del Gobierno y pone de manifiesto la influencia preponderante de las fuerzas armadas (BTI, 2018).

3.2 Ghana

Indicadores económicos, sociales y de gobernanza

La economía de Ghana no ha dejado de crecer durante los últimos cinco años:

- El PIB per cápita ha subido de 1721 a 2164 dólares estadounidenses
- El PIB global ascendió de 47 700 millones a 65 300 millones de dólares estadounidenses
- El índice de crecimiento aumentó del 2,2 % al 6,5 %
- La tasa de inflación cayó del 17,1 % al 7,9 % ([Focus Economics](#))

En 2020, el Índice de Libertad Económica declaró a la economía ghanesa como «mayormente controlada» desde 2017. Ghana obtuvo una puntuación de 59,4 en el Índice, lo cual sitúa a su economía en el puesto 104 a nivel mundial. El país ocupa la undécima posición de 47 países de la región del África subsahariana, mientras que su puntuación general está muy por encima de la media regional y ligeramente por debajo de la media mundial.

En los últimos dos años, ha ido avanzando lentamente hacia las posiciones de «moderadamente libre», en base a la aceleración en el crecimiento del PIB (aunque gran parte de este proviene de la expansión del sector de gas y petróleo).

El Índice recomienda a Ghana que estimule el crecimiento en los sectores no petroleros mejorando su situación fiscal, no asumiendo más deuda (incluyendo de China) y priorizando nuevas mejoras en derechos de propiedad, la eficacia judicial y la integridad gubernamental.

En cuanto al campo de la TPA, hay mucho trabajo por hacer, tanto en el apoyo a la expansión de sectores de la economía diferentes al gas y petróleo, como en la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en la industria del petróleo y el gas.

En general, Ghana obtiene buenos resultados en los indicadores de gobernanza, lo cual propicia un entorno facilitador para las intervenciones en materia de TPA:

- Índice de Gobernanza en África de la Fundación Mo Ibrahim: Ghana obtiene una puntuación de 45,2 de 100 en transparencia y rendición de cuentas, una tendencia descendente durante los últimos cinco años.
- Los Indicadores Mundiales de Gobernanza puntúan a Ghana con un 65,5 en cuanto a su desempeño en voces y rendición de cuentas, una mejora de 1,5 puntos.
- El Barómetro Global de la Corrupción se centra en qué medida los ciudadanos están de acuerdo con la afirmación de que «las personas corrientes pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción», y coloca a Ghana en el puesto 60, con una mejora general en su desempeño de +7 a lo largo de los cinco años.

Contexto político

Ghana es conocida por ser uno de los pocos países africanos en instaurar una democracia sólida, con unas elecciones que, por lo general, son pacíficas, un crecimiento económico continuo, respeto por los derechos humanos y elecciones libres y justas.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos en Ghana están asociados con una frágil capacidad estatal para emprender una transformación estructural profunda que permita que el amplio abanico de grupos de interés contribuya con eficacia a la gobernanza y la democracia.

El presidente Akufo-Addo, del NPP, fue reelegido en 2020, derrotando a su predecesor John Mahama, del Congreso Democrático Nacional (NDC). Estos dos partidos políticos han dominado la escena política de Ghana.

Las elecciones generales siempre han concluido en segundas vueltas o resultados ajustados (con victorias que apenas superan el 50 % de los votos). Como resultado, las campañas suelen ser intensas, lo cual no conlleva sino a sociedades polarizadas. Además, esta situación se ha extendido también a los períodos entre comicios, sofocando lo que podría haber conducido, de otro modo, a debates políticos saludables, ya que hasta la sociedad civil suele posicionarse.

Las campañas de 2016 y 2020 de Akufo-Addo giraron en torno al desarrollo económico. Prometió construir [un país que fuera más allá de la ayuda](#), en el que se suscribe un nuevo contrato social entre el Gobierno y los ciudadanos. Este contrato social aunaría todos los recursos (financieros, humanos, etc.) y los emplearía para la consecución de logros, con efectos inclusivos que sobrepasen los marcos de los donantes internacionales y las instituciones de toma de decisiones.

En septiembre de 2020, Akufo-Addo firmó la Ley sobre Vigilantismo y Delitos Conexos, por la que se prohíben todos los grupos políticos de vigilancia parapolicial, o de otro tipo, y establece sanciones de hasta 15 años de prisión por actos de vigilancia parapolicial. Los efectos prácticos de esta nueva ley aún están por ver (Freedom House, 2020).

La corrupción vinculada a la política sigue siendo un problema en Ghana, a pesar de la amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, la existencia de leyes e instituciones bastante sólidas y las iniciativas gubernamentales contra la corrupción. La legislación promulgada en 2017 supuso el establecimiento de la Fiscalía Especial para investigar la corrupción política.

El presidente Akufo-Addo nombró al antiguo fiscal general, Martin Amidu, militante del NDC (partido de la oposición), como fiscal especial en 2018. Sin embargo, Amidu se ha quejado públicamente sobre la falta de financiamiento estatal para las actividades de la Fiscalía Especial. Desde su creación, la Fiscalía Especial ha investigado varios casos, pero aún no ha establecido un historial de enjuiciamientos contra funcionarios públicos (Freedom House, 2020).

En mayo de 2019, Akufo-Addo firmó la Ley de Derecho a la Información, resultado de casi dos décadas de debate, con la que se otorga a los ciudadanos el derecho a solicitar, acceder y recibir información sobre instituciones públicas y algunas entidades privadas (Freedom House, 2020).

El debate privado es libre y dinámico: el Gobierno no restringe la libertad de expresión en las redes sociales. El derecho de reunión pacífica está garantizado por la Constitución y, generalmente, se respeta. No se requieren permisos para celebrar reuniones o manifestaciones. La legislación pretende promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en asuntos públicos.

En diciembre de 2018, Ghana puso en marcha el Tablero de Mando Nacional para la Elaboración de Informes contra la Corrupción, una herramienta en línea para la elaboración de informes, con el objetivo de coordinar los esfuerzos contra la corrupción de diferentes organismos, de conformidad con lo establecido en el Plan de Acción Nacional Anticorrupción. Esta herramienta ha sido utilizada por un total de 169 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para informar sobre sus esfuerzos contra la corrupción en el país (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019: 14).

En Ghana abundan leyes y normativas que fomentan un entorno propicio para la gobernanza, pero ahora es necesario que estas funcionen en aras de una mejor transparencia, participación y rendición de cuentas entre las sociedades en Ghana.

Sociedad civil y participación ciudadana

Por lo general, las ONG pueden desarrollar su actividad sin trabas, y desempeñan un importante papel a la hora de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental. En el último análisis de Bertelsmann Stiftung sobre la gobernanza en Ghana se destaca que el país cuenta con una tradición de sociedad civil relativamente bien asentada, respaldada por la ayuda de los donantes, un marco normativo y una cultura política que permite la libertad de organización y de expresión (BTI, 2018).

Los grupos de la sociedad civil son francos y están bien preparados para usar los medios de comunicación a fin de expresar sus opiniones e interactuar con el Gobierno. Sin embargo, en ocasiones, los políticos utilizan activamente a las OSC para sus propios fines (BTI, 2018: 30), y no siempre es fácil diferenciar entre las ONG verdaderamente independientes y aquellas que sostienen vínculos muy estrechos con un partido político o con una figura política prominente.

La relativa constancia del crecimiento económico ha hecho que el dinero fluya hacia los bolsillos de una clase media urbana (la columna vertebral de las ONG) que, a pesar de no ser extensa, crece sistemáticamente. En zonas rurales persisten formas más tradicionales de organización. Las organizaciones religiosas, en especial el siempre creciente número de iglesias pentecostales e iglesias independientes africanas, junto con las instituciones que las acompañan, desempeñan un papel cada vez más importante, incluyendo la prestación de servicios esenciales para la sociedad.

Por otra parte, el sindicalismo continúa siendo relativamente frágil y solo es visible ocasionalmente en la organización del descontento popular (BTI, 2020: 12). De acuerdo con fuentes de sitios web gubernamentales, hay unas 300 000 ONG registradas con el Ministerio de Trabajo, Educación y Juventud de Ghana, el órgano regulador del Estado, sin contar a las ONG internacionales (BTI, 2020: 13).

Además de permitir que la sociedad civil actúe con libertad, hay una sensación generalizada de que el Gobierno ghanés está abriendo el espacio para la participación de la sociedad civil. Durante las últimas dos décadas, las OSC han evolucionado, pasando de una implicación mínima a convertirse en actores activos en diferentes etapas del ciclo de formulación de políticas.

El Gobierno alienta la participación de los actores de la sociedad civil en el establecimiento de agendas y la formulación de políticas hasta cierto punto, sobre todo cuando quiere demostrar un compromiso para con la transparencia o abordar algunos asuntos apremiantes.

El Gobierno también implica a la sociedad civil cuando su contribución se requiere inequívocamente para prestar servicios necesarios para la población (como es el caso del sistema de salud). A veces, se emplean los conocimientos de ONG especializadas para subsanar una falta de conocimientos de las instituciones estatales, sobre todo si su financiamiento es extranjero. En el ámbito educativo, el Gobierno también ha involucrado de forma activa a agentes de la sociedad civil, convirtiéndolos en partes interesadas a fin de acelerar el progreso de las reformas emprendidas.

Por lo general, la élite política ha aceptado el papel que desempeña una sociedad civil activa, incluso si en ocasiones las relaciones pueden volverse tensas (BTI, 2020: 33). Sin embargo, los políticos elegidos y los funcionarios de la administración pública consideran que las críticas o las preguntas de los agentes de la sociedad civil no están justificadas y son irrespetuosas.

La adopción o no por parte de los ministerios y otros organismos gubernamentales de una cultura de apertura y colaboración con la sociedad

civil depende, en última instancia, de las personas que conforman esas instituciones. Como se menciona en el análisis de la gobernanza en Ghana de Bertelsmann Stiftung, el establecimiento de agendas y la planificación estratégica está en manos de personas poderosas, y si una estrategia no es capaz de obtener el apoyo del ministro correspondiente quedará en papel mojado (BTI, 2018: 26). Un representante de SEND-Ghana expresó algo similar:

«En Ghana, el problema no es el grado de apertura del Gobierno, sino la calidad de esa apertura; deberían escucharnos y trabajar con nosotros. A menudo, este problema está relacionado con las personas en sí. A algunos funcionarios de los ministerios les entusiasma este tema, pero a otros no. Por lo tanto, en ese sentido no podemos hablar del Gobierno como un organismo unificado».

(Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)

En Ghana, la participación ciudadana es mejor a escala subnacional (a nivel de distritos o comunidades). A nivel nacional, algunas personas muestran apatía, mientras que otras tiran la toalla y sacan la conclusión de que todos los actores políticos son iguales.

Los ciudadanos en Ghana también participan a través de sus jefes, como demuestra el decisivo papel que ha desempeñado la Cámara Nacional de Jefes en la promoción de un proceso electoral pacífico, gracias a lo cual se han celebrado elecciones creíbles. En 2016, por ejemplo, la Cámara Nacional de Jefes fue clave a la hora de facilitar la cohesión nacional y la paz electoral mediante la firma de otro pacto de paz durante un foro en Accra (IDEG, 2016). En ese foro, los candidatos presidenciales se comprometieron a tomar medidas contra todas las formas de violencia que socaven la credibilidad y la integridad de las elecciones y sus resultados. Esto contribuyó a garantizar la colaboración entre actores políticos nacionales para salvar al país de los estragos potenciales que ocasiona la violencia electoral.

3.3 Kenia

Indicadores económicos, sociales y de gobernanza

La economía de Kenia ha experimentado un crecimiento constante, impulsada por el aumento de la demanda de los consumidores. El PIB per cápita ascendió de 1433 dólares estadounidenses en 2015 a 1931 dólares estadounidenses

en 2019, mientras que el PIB global pasó de 63 300 millones de dólares estadounidenses a 95 300 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, la deuda pública también creció, de un 50 % del PIB a un 63 %. Gran parte es deuda interna que termina por paralizar el crecimiento del sector privado y, posteriormente, el de la economía.

En el Índice de Libertad Económica de 2020, Kenia ocupa el puesto 23 de 47 países del África subsahariana, con una puntuación de 55,3. Esto sitúa al país cerca de la media regional, pero muy por debajo de la media mundial, en la que se encuentra en 132^a posición de los países más libres.

La economía de Kenia ha sido catalogada como mayormente controlada durante más de dos décadas. En los últimos años, la libertad económica se ha restringido debido a la fragilidad del estado de derecho (en especial la integridad del Gobierno) y a la escasa libertad de inversión y de finanzas.

La formulación y ejecución de políticas siguen siendo vulnerables a riesgos como las sequías, la inseguridad, la corrupción y las disputas políticas entre los dirigentes políticos.

La economía de Kenia se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19, sobre todo en términos de ingresos y empleo (Banco Mundial, 2020). El informe del Banco Mundial achaca esto a las medidas de confinamiento adoptadas por Kenia en respuesta a la crisis, que han restringido las actividades económicas nacionales, el comportamiento de los ciudadanos, el comercio y los viajes (lo cual perjudica a los sectores que más se beneficiaban de las divisas extranjeras, como el turismo).

La pandemia ha supuesto un aumento de la pobreza en Kenia de 4 puntos porcentuales (equivalente a 2 millones más de pobres), debido a su devastador efecto en los medios de subsistencia, lo cual ha provocado una estrepitosa caída de los ingresos y ha duplicado el desempleo, que supera el 10 %. Para los trabajadores asalariados que han conservado su empleo, se han reducido su jornada laboral y sus ingresos, agravando la seguridad alimentaria y el sufrimiento humano.

Los ingresos fiscales también cayeron por debajo de lo previsto, como consecuencia de la desaceleración económica y las exenciones fiscales ofrecidas por el Gobierno que, a su vez, aumentó el gasto público para reforzar la capacidad del sistema de salud a fin de gestionar los contagios, proteger a los hogares más vulnerables y apoyar a las empresas.

El resultado neto sugiere que Kenia está teniendo problemas en el ámbito social y económico (Banco Mundial, 2020). Los analistas de [FocusEconomics](#) pronostican un crecimiento del PIB del 5,0 % en 2021, y del 5,4 % en 2022, pero destacan el problema de la creciente deuda pública.

En cuanto a los indicadores clave de gobernanza, el Índice de Gobernanza en África de la Fundación Mo Ibrahim de 2020 puntúa a Kenia con 45,4 de 100 en términos de transparencia y rendición de cuentas, una tendencia a la mejora. Los Indicadores Mundiales de Gobernanza otorgan a Kenia un 36,5 por su desempeño en voz y rendición de cuentas, una caída de 6 puntos a lo largo de un período de cinco años. La puntuación de Kenia en el Barómetro Global de la Corrupción también ha sufrido un descenso (de 4 puntos durante los últimos cinco años), situando al país en 54 puntos. El panorama general refleja un peor desempeño en la gobernanza, en especial en el período previo a las elecciones de 2022.

Contexto político

La economía política de Kenia se caracteriza por una tensión continua entre las políticas de redistribución (la lucha por una economía inclusiva y el acceso a activos clave como las tierras) y la política del «reconocimiento» (la lucha por la identidad a través del origen étnico).

La presión por las identidades colectivas cobra fuerza en las negociaciones políticas, en la competitividad política y en las elecciones generales. Sin embargo, la negociación basada en la identidad mina los esfuerzos centrados en la redistribución de los recursos socioeconómicos, y conlleva un aumento de la desigualdad y la aparición de élites que tienen acceso a recursos simplemente por quiénes son o cómo se identifican, dificultando que se materialice la redistribución de activos (Branch, 2011).

En la última década, el principal cambio en materia de gobernanza fue la promulgación de la Constitución de 2010. La Constitución es la parte central de la solución política de Kenia –el equilibrio de poder y el acuerdo entre los diferentes grupos sobre normas políticas y económicas–, así como del crecimiento del país y la agenda de redistribución.

La Constitución de 2010 estuvo seguida por un proceso de descentralización que cambió el sistema de gobernanza en Kenia, con una transferencia de poderes con la que se pasó de un estado altamente centralizado a la creación de 47 nuevos gobiernos en los condados.

Los artículos 174 y 175 de la Constitución son fundamentales para enmarcar el contexto de la transparencia, participación y rendición de cuentas en Kenia. En ellos, se enfatiza que la descentralización debería: facilitar el gobierno autónomo de la población de Kenia; promover la democracia y el uso responsable del poder estatal y la participación pública en la toma de decisiones; fomentar y proteger los derechos e intereses de las minorías y los grupos marginados; avanzar en el desarrollo social y económico y prestar servicios en todo el país y proporcionar acceso a los mismos.

Poner en práctica lo dispuesto en la Constitución de 2010 ha sido un gran desafío.

Los Gobiernos de los condados recién creados han tenido que desarrollar sus propios mecanismos para implicar a diferentes actores, incluyendo al sector privado, ciudadanos, la sociedad civil, los líderes tradicionales, las organizaciones religiosas e incluso a agencias externas. Algunos condados con gobernadores más progresistas, como el condado de Makueni, promueven la gobernanza participativa, mientras que otros están muy rezagados.

Las diferencias contextuales en Kenia han conllevado que el progreso hacia una descentralización fructífera haya sido desigual, ya que es necesario adoptar enfoques diferentes dependiendo de la situación inicial del condado, lo cual ha tenido un impacto directo en la naturaleza de las iniciativas en materia de TPA.

Algunos condados han conseguido mejorar la gestión de sus recursos, mientras que en otros han preponderado los residuos, la mala gestión y la corrupción, como se expone en los informes del Auditor General y el Contralor del Presupuesto.

Existen desigualdades tanto entre los diferentes condados como dentro de cada condado. Por lo tanto, aún no se ha alcanzado el pleno potencial de la descentralización y, si esto no se aborda adecuadamente, podría tener repercusiones generales para las perspectivas de desarrollo de Kenia.

Las próximas elecciones de 2022 ya están determinando las maniobras políticas de varios partidos. Se están librando batallas, por ejemplo, por los detalles de la [Building Bridges Initiative](#) (BBI, por sus siglas en inglés), resultado del apretón de manos entre su excelencia Uhuru Kenyatta y el honorable Raila Odinga en marzo de 2018. Se esperaba que esto conlleva una revisión constitucional sobre cómo reformar el poder y cómo cuestionar el mismo. Algunos, en especial quienes respaldan al vicepresidente, consideran que la BBI es mero sensacionalismo innecesario de cara a las próximas elecciones.

Estas maniobras políticas suelen socavar los esfuerzos para desarrollar una política y práctica oportunas y bien fundadas, basadas en la transparencia y la rendición de cuentas. Si el referendo prospera y se aprueba la BBI propuesta, el debate Estado-sociedad girará en torno a nuevas estructuras de poder, además de los Gobiernos de los condados y el ejecutivo.

Ahora mismo, es difícil predecir si estos proyectos de ley conducirán a intensificar los logros democráticos obtenidos a lo largo de la última década, ya que hay fuerzas importantes que se oponen a la BBI. Los actores opuestos a

la BBI cuestionan si es prudente introducir nuevas estructuras tan cerca de las elecciones, debido a la posibilidad de que suponga un incremento del gasto burocrático. Esta situación ha acabado por dividir en gran medida a los movimientos juveniles y a la sociedad civil, debido a la polaridad política vinculada a causas étnicas.

Kenia ha promulgado leyes progresistas, como la Ley contra los Delitos Económicos y de Corrupción de 2003 y la Ley contra el Cohecho de 2016, además de establecer organismos de supervisión independientes como la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción.

Sin embargo, desde la perspectiva ciudadana, estas medidas formales parecen estar arrojando resultados muy deficientes. Las pruebas apuntan a que Kenia sigue lidiando con altos niveles de corrupción y una impunidad generalizada y arraigada (a menudo asociada con fuertes vínculos con políticos). Además, los servicios esenciales como las fuerzas del orden, el sistema judicial y servicios de la tierra siguen siendo prominentes en el Índice de Soborno. Como resultado, el público considera que los esfuerzos emprendidos por el Estado para luchar contra la corrupción son mayormente performativos y se aplican con criterio selectivo para impulsar las agendas políticas.

Sociedad civil y participación ciudadana

Kenia tiene un sector de ONG activo, en el que la sociedad civil ha desempeñado un papel crucial en la creación de una esfera pública democrática. Un ejemplo de esto son la transición de 1999 hacia una democracia multipartidista, las conferencias constitucionales de 2003 y 2004 y la aplicación de la Constitución de 2010 (BTI, 2020: 29).

Sin embargo, en los últimos años, los grupos de la sociedad civil se enfrentan a obstáculos cada vez mayores, como los reiterados intentos por parte del Gobierno de anular la inscripción en los registros públicos de cientos de ONG por supuestas infracciones financieras.

El Gobierno de Kenyatta se ha mostrado crítico con las ONG, rechazando el inicio de la ejecución de la Ley de Organizaciones de Beneficio Público. La ley fue aprobada en 2013 con el objetivo de mejorar el marco normativo para las ONG y ofrecerles una mayor libertad para desarrollar su actividad (Freedom House, 2020). Sin embargo, seguía vigente la antigua legislación de la época autocrática de Moi y, en ocasiones, se empleó para interferir en las actividades de las ONG y sabotearlas (BTI, 2020: 9).

En 2016, Kenia aprobó la Ley de Acceso a la Información, basada en la Constitución de 2010, en la que se estipula que cada ciudadano tiene derecho a acceder

(a) a la información en poder del Estado; y (b) a la información en poder de otra persona necesaria para el ejercicio o la protección de cualquier derecho o libertad fundamental. Además, con esta ley se alienta al Gobierno keniano a publicar o difundir toda información importante que afecte al país.

Varias disposiciones legales precisan que las instituciones y los funcionarios públicos proporcionen o difundan información completa de forma oportuna, incluyendo la Ley (No. 1A de 2015) de la Administración Pública (Valores y Principios) y la Ley para la Gestión de Finanzas Públicas (2012).

Sin embargo, la creciente inquietud en torno al acceso a la información mina los logros alcanzados en materia constitucional y jurídica. Esto incluye una mejora del monitoreo y la vigilancia del Estado, incluso en las redes sociales; amenazas a la libertad de expresión y de opinión mediante la Ley sobre la Utilización Abusiva de la Informática y Delitos Cibernéticos (2018); y una reducción del espacio cívico, en especial durante el período electoral.

La descentralización ha aumentado los espacios de participación ciudadana. Sin embargo, algunos proyectos como el Programa para la Consolidación de la Democracia corroboran que hay enormes variaciones en la medida en que se facilita una participación ciudadana significativa.

La mayoría de los ciudadanos interactúan con el Gobierno de su condado mediante los miembros de las Asambleas de Condado (MAC). El problema es que estos MAC dejan que desear en lo que respecta a cuestionar los informes elaborados por el Gobierno del condado (TIK, 2020).

El 56 % de los ciudadanos no tienen acceso a la información sobre el desempeño del Gobierno de su condado en diversos aspectos, y quienes consiguen acceder a la misma lo hacen mediante la radio y la televisión (Transparencia Internacional Kenia, 2020). Solo el 31 % de los Gobiernos de condados divulgan información de manera proactiva sobre su desempeño, a pesar de que todos tienen un acceso exclusivo a funcionarios encargados de la información (ibid). Los Planes Integrados para los Gobiernos de Condado se encuentran entre los documentos que sí se difunden.

Evidentemente, queda mucho trabajo por hacer para mejorar el acceso de los ciudadanos a la información de aplicación práctica. Como indicó uno de los entrevistados:

«Por otra parte, no ponen las cosas fáciles. De hecho, el Gobierno busca causar frustración negándose a proporcionar información o facilitándola tarde y tácticas por el estilo. Un ejemplo de esto es la manera en que funciona el proceso presupuestario para los Planes Integrados de Desarrollo de los Condados. Se trata de plataformas de participación contempladas por la legislación y, supuestamente, los ciudadanos tienen derecho a participar. Sin embargo, lo que sucede es que no recibimos los documentos relativos al presupuesto y, cuando los proporcionan, no tienen el formato adecuado. Así es como se frustran estos mecanismos de participación y como llegan a convertirse en meros ejercicios de cara a la galería».

(Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)

Solo algunos Gobiernos de condado, como el condado de Makueni, han ido más allá simplemente proporcionando los documentos relativos al presupuesto y la planificación. El Ejecutivo del condado involucra al público en las fases de preparación y aprobación del presupuesto anual mediante diferentes foros (*barazas*, o reuniones, y la radio), utilizando su marco de participación pública. Cabe destacar, sin embargo, que hablamos de excepciones a las usuales prácticas informales de los funcionarios de los condados (KIPRA, 2019).

La participación suele tener un carácter consultivo, en lugar de basarse en la dialéctica y el empoderamiento. Además, la creación de espacios o las invitaciones para participar se notifican con frecuencia con demasiada poca antelación como para poder garantizar una colaboración significativa.

3.4 Sénegal

Indicadores económicos, sociales y de gobernanza

El Índice de Libertad Económica califica a Senegal como mayormente libre, con una economía en expansión durante los últimos cinco años. Obtiene una puntuación de 58, ocupando el 110^o lugar del mundo y la 13^a posición de 47 países del África subsahariana, por encima de la media regional.

Sin embargo, la libertad económica se ve contrarrestada por un sistema judicial deficiente, la escasa integridad del Gobierno y una falta de libertad

empresarial (exceptuando unos pocos sectores más destacados, como el turismo y el transporte).

Las perspectivas de crecimiento del PIB de Senegal son, por lo general, favorables, y se prevé que mantengan esta solidez con un 6,8 % en 2020, muestra del aumento de las inversiones y exportaciones. Las tasas de crecimiento podrían superar el 7 % desde 2021 en adelante si la vulnerabilidad fiscal se contiene y las reformas de transformación se ejecutan con vistas a atraer las inversiones del sector privado (comunicado de prensa del Banco Mundial, 2020).

En lo que respecta a los indicadores clave de gobernanza, el Índice de Gobernanza en África de la Fundación Mo Ibrahim otorga al desempeño de Senegal en materia de transparencia y rendición de cuentas una puntuación de 57,2 de 100, lo cual indica una tendencia de ralentización de la mejora durante los últimos cinco años. Los Indicadores Mundiales de Gobernanza otorgan a Senegal una puntuación de 55,7 en voz y rendición de cuentas, una caída de 2 puntos. Sin embargo, según el Barómetro Global de la Corrupción, el 52 % de los ciudadanos está de acuerdo con que «las personas corrientes pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción» en Senegal, una mejora de 4 puntos durante los últimos cinco años.

Esto indica una trayectoria positiva en el campo de la transparencia, participación y rendición de cuentas (TPA, por sus siglas en inglés), eso sí, a un ritmo de progreso más lento del esperado.

Contexto político

En febrero de 2019, el presidente Macky Sall fue reelegido para un segundo mandato consecutivo, haciéndose con el 58 % de los votos en la primera vuelta y evitando así la segunda vuelta. Dos líderes de la oposición fueron excluidos por condenas anteriores con una gran carga política, acusados de malversación de fondos públicos (Freedom House, 2020).

En mayo de 2019, los legisladores aprobaron una polémica medida para abolir el puesto de primer ministro, firmada por el presidente. Esto provocó el clamor de los críticos, quienes le acusaron de intentar consolidarse en el poder y deteriorar el sistema de control y equilibrio (Freedom House, 2020).

La corrupción sigue siendo un grave problema en Senegal y los altos funcionarios suelen actuar con impunidad. Los organismos anticorrupción hacen respetar la ley de manera desigual y, a veces, se tiene la sensación de que responden a motivaciones políticas (Freedom House, 2020).

En 2014, y de nuevo en 2018, los violentos enfrentamientos entre estudiantes y la policía pusieron de manifiesto el riesgo potencial de conflictos por la grave crisis del sistema educativo. Las cuestiones monetarias y los problemas relacionados con la vivienda también son motivos de enfrentamientos frecuentes, que en ocasiones se politizan. El elevado desempleo juvenil y una sensación de marginación en varios grupos no hacen sino agravar la situación (BTI, 2020: 32).

Las elecciones del 2012 y el referendo de 2016 han fortalecido el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), aunque la participación de la sociedad civil en la gobernanza del país sigue siendo limitada.

En líneas generales, el presidente Macky Sall tiene un estilo de gobernanza más inclusivo que su predecesor y mantiene lazos políticos y personales estrechos con líderes de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación. En términos generales, apoya la actividad de las OSC e implica a estas organizaciones y a sus líderes en los procesos de formulación de políticas.

En mayo de 2016, Sall mantuvo un «diálogo nacional» con la oposición, la sociedad civil y organizaciones religiosas. El acto no consistió en un diálogo, sino más bien en una serie de presentaciones, aunque sí allanó el camino para la liberación y el posterior exilio de Karim Wade.

Sin embargo, no ha habido ningún tipo de seguimiento real (BTI, 2020: 36). Esto sugiere que, a pesar de la existencia de espacios para el diálogo en Senegal, no se sabe realmente cuál es su finalidad real, lo cual podría llevar a pensar que se trata de pura fachada.

De acuerdo con los entrevistados, en Senegal la democracia está consagrada en la legislación, la normativa y la práctica. Hay numerosos marcos jurídicos (incluyendo en la constitución y en otras normativas) que estipulan la necesidad de facilitar la participación ciudadana.

Se han creado instituciones destinadas a facilitar la contribución ciudadana en la formulación de políticas, el monitoreo y la rendición de cuentas. También existen disposiciones para la participación a nivel sectorial, por ejemplo, en la gobernanza de la tierra, se tardó tres años en formular una política específica por las numerosas consultas que se llevaron a cabo. En el sector de la salud, el Gobierno ha establecido una comisión ministerial para ofrecer una cobertura de salud universal en la que se involucró a las OSC, con las que se reúne con frecuencia.

«Si echamos la vista atrás, hemos pasado de los enfrentamientos y las protestas a ser una «máquina de

hacer propuestas», que el Gobierno puede tener en cuenta ahora con más facilidad en su toma de decisiones. Por ejemplo, la ley sobre la cobertura médica universal se inspiró en gran medida de las contribuciones y las investigaciones de las OSC. El espacio político es lo suficientemente amplio como para dar cabida a la participación de la TPA en esta «maquinaria de propuestas», y el Gobierno puede beneficiarse de muchas ideas del sector privado, de las OSC y de otros actores».

(Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)

Existe una gran variedad de medios de comunicación libres (radio, televisión y retransmisión), tal y como indicó un entrevistado:

«Si escuchas la radio en Senegal uno se pregunta, ¿cómo puede aceptar esto el Gobierno? También se adoptó la Ley de Acceso a la Información, para la que tuvimos que esperar mucho tiempo y realizar incidencia durante 25- 26 años, pero ya queda poco camino por recorrer. Además, en la Asamblea Nacional se celebran audiencias en las que se pide a las OSC que presenten las actividades en las que están trabajando».

(Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)

Sociedad civil y participación ciudadana

La participación cívica en Senegal tiene dos vertientes diferentes: (1) la participación en la esfera política y (2) la participación relacionada con la prestación de servicios, según nos informaron los entrevistados. En el ámbito político, hay una percepción generalizada de que las OSC adoptan el discurso político y sus posturas para interactuar con el Gobierno, lo cual resulta problemático. En la prestación de servicios, se considera que la participación suele obtener más logros que en el terreno político, ya que las OSC trabajan en asuntos temáticos que repercuten en las vidas y los medios de subsistencia de la población.

Los partidos de la oposición, la sociedad civil y los grupos de interés han criticado el estado de deterioro de las instituciones democráticas. Todavía está por ver si las recientes reformas constitucionales del referendo de 2016, algunas de

las cuales no se han aplicado aún, mejorarán la situación (BTI, 2020: 14). A finales de 2018, el movimiento de oposición Front de Résistance Nationale (FRN), formado principalmente por jóvenes, organizó mítines para protestar contra el *parrainage*, o patrocinio, así como la falta de transparencia en el proceso electoral y la exclusión de Karim Wade y Khalifa Sall (BTI, 2020: 15).

Los sindicatos senegaleses trabajan activamente, pero sus efectos siguen siendo relativamente insignificantes, ya que tan solo representan a una parte de la población activa. La economía formal de Senegal, donde los sindicatos son fuertes, tiene un tamaño reducido y se está contrayendo, como demuestra la cifra de tan solo 500 000 personas empleadas en los sectores público y privado en total. Los sindicatos senegaleses apenas inician su actividad en la economía informal, de mucha más envergadura y que representa el 95 % de la economía del país.

La economía informal está sumamente autoorganizada. Algunas organizaciones informales tienen representación nacional y/o presencia en Dakar. Otras se encuentran en una fase de transición, pasando de ser grupos ad hoc a convertirse en organizaciones formales en las comunidades periféricas de Dakar. Algunas de estas organizaciones han decidido unirse a grandes sindicatos centrales como la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal y la Confédération des Syndicats Autonomes (Abizaid, 2019).

En 2018, el Ministerio del Interior de Senegal reconoció a la Confederación de Organizaciones de la Economía Informal como la federación de sindicatos oficial para los trabajadores del sector informal. De esta forma, se concede acceso a los trabajadores a diferentes beneficios, como la cobertura médica universal.

Una decisión reciente de introducir un umbral del 10 % para nominar a federaciones para el diálogo social tripartito con motivo de las elecciones podría conllevar una consolidación y una mayor unidad organizativa entre sindicatos, lo cual multiplicaría su influencia (BTI, 2002: 16).

En Senegal, el panorama asociativo es prolífero (para los estándares del África subsahariana), como demuestra el gran número de ONG muy activas que trabajan en el país.

Sin embargo, muchos grupos comunitarios y ONG sufren una falta de recursos. A menudo, las ONG dependen excesivamente del financiamiento de donantes internacionales, lo cual puede minar su credibilidad a los ojos del Gobierno y los ciudadanos.

Hay una mezcla de OSC cooptadas y OSC críticas. Algunas organizaciones, que desempeñaron un papel esencial en la derrota del presidente Wade en las elecciones de 2012 y en la consiguiente transición pacífica del poder, han sido cooptadas en el Gobierno del presidente Sall. Otras han retomado su función como organizaciones externas críticas.

En el período previo a las elecciones presidenciales del 2019, el Gobierno impuso varias restricciones a la sociedad civil, incluyendo la anulación de su inscripción en los registros públicos. Sin embargo, no quedaba claro cuál era el motivo, si se debía al nerviosismo por las elecciones o si marcaba el inicio de un cambio permanente (BTI, 2020: 31).

Los medios de comunicación y las OSC desempeñan un papel activo en el estímulo y la facilitación del debate público. Además, la población de Senegal está interactuando activamente con el Gobierno.

Sin embargo, los activistas de los derechos han expresado su inquietud por la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, en noviembre de 2018, de un proyecto de ley sobre las comunicaciones electrónicas. El proyecto de ley incluía una disposición redactada de manera imprecisa que ampliaba las competencias reguladoras del Gobierno en perjuicio de las empresas de redes sociales, y que podría utilizarse para cerrar, gravar o vigilar las comunicaciones de plataformas de redes sociales populares (Freedom House, 2020).

Por lo general, los derechos de las empresas privadas están protegidos adecuadamente. Senegal está entre los países africanos con mejor puntuación en términos de transparencia y rendición de cuentas de las decisiones gubernamentales. Sin embargo, la corrupción y las acciones arbitrarias tomadas por el Gobierno siguen siendo un problema (BTI, 2020: 24).

Los líderes religiosos, como las hermandades sufíes y sus respectivos imanes, ejercen una influencia y un poder político informal considerable.

3.5 Tanzania

Indicadores económicos, sociales y de gobernanza

Tanzania goza de una situación relativamente estable desde el punto de vista político y social en comparación con algunos de sus países vecinos.

Es una de las economías africanas de más rápido crecimiento, con una tasa media anual del 7% desde el año 2000. En 2020, el Banco Mundial mejoró la clasificación de la economía de Tanzania de bajos ingresos a ingresos medianos bajos,

con un ingreso nacional bruto per cápita estimado de 1080 dólares estadounidenses en 2019. Sin embargo, la transformación económica ha sido pobre.

La pobreza descendió en un 8 % a lo largo de diez años, según el informe *Tanzania Mainland Poverty Assessment* (evaluación de la pobreza de Tanzania continental) de 2019, es decir, una reducción del 34 % en 2007 al 26% en 2018. Gran parte de esta disminución de la pobreza se vivió en las zonas rurales (donde se concentra la mayoría de la pobreza), seguida de zonas urbanas fuera de Dar es Salaam ([Banco Mundial](#)).

Tanzania se encuentra en la categoría de desarrollo humano bajo, con una puntuación de 0,538 en el Índice de Desarrollo Humano de 2017, es decir, en la posición 154 de 189 países y territorios. Esto supuso un aumento del 45 % respecto a su puntuación en 1990 (PNUD, 2018). La sociedad tanzana también está experimentando una mejora cada vez mayor de la igualdad en la educación y la riqueza (Maliti, 2019).

La reducción de la pobreza y las mejoras en materia del desarrollo humano son producto de un aumento constante del acceso a los servicios básicos, según [sugiere el Banco Mundial](#). Las encuestas realizadas por el Afrobarómetro corroboran estas afirmaciones e indican que, desde el 2014, la prestación de servicios parece haber mejorado en los sectores prioritarios para el público (salud, agua, educación y electricidad). Además, menos ciudadanos se quejan de dificultades, retrasos o exigencias de sobornos. Sin embargo, la probabilidad de afrontar dificultades y retrasos era superior entre los ciudadanos más pobres que entre la población más adinerada (Msafiri, 2018).

Las puntuaciones de Senegal en los indicadores de gobernanza han descendido algo en los últimos años. En transparencia y rendición de cuentas, Tanzania obtuvo una puntuación de 42 de 100. En el Índice de Gobernanza en África de la Fundación Mo Ibrahim de 2020 se ha observado una mejora a lo largo de los últimos cinco años. En la categoría voz y rendición de cuentas de los Indicadores Mundiales de Gobernanza de 2019 el país recibió 32 puntos de 100, una caída de 7 puntos durante los últimos cinco años. Por último, en el Barómetro Global de la Corrupción de 2019, el 50 % de los ciudadanos se mostraron de acuerdo con que «las personas corrientes pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción», una disminución de 5 puntos porcentuales en los últimos cinco años.

Contexto político

Factores históricos y políticos

Nota: el presidente Magufuli falleció el 17 de marzo de 2021, con posterioridad a la

redacción de este informe. Fue sustituido por la hasta entonces vicepresidenta Samia Suluhu Hassan.

La política pluripartidista entró en escena en el país en 1992. Aun así, el partido en el poder Chama Cha Mapinduzi (CCM) ha seguido dominando la esfera política, tal y como sucede desde la independencia de Tanzania en 1961. La sólida base del partido gobernante servía, en parte, para lograr la estabilidad nacional, con la ayuda de la cooptación de las fuerzas de seguridad, evitando así la emergencia de una oposición organizada.

En las elecciones de 2015, apareció el Partido por la Democracia y el Progreso (Chadema), convirtiéndose en una oposición formidable y obteniendo el 40 % de los votos. Sin embargo, fue derrotado por John Pombe Magufuli, quien acometió una centralización del poder.

En el período previo a las elecciones de 2020, Magufuli reprimió de manera sistemática a la oposición y a los medios de comunicación. Posteriormente, ganó las elecciones presidenciales con un amplio margen, entre acusaciones de fraude por parte de la oposición (Andreoni, 2017; Eriksen, 2018; Freedom House, 2020).

La rendición de cuentas horizontal flaquea. Si bien la Asamblea Nacional es algo más que una institución que se limita a refrendar decisiones, sus deliberaciones y mecanismos de control son deficientes, pues el partido político dominante ostenta la mayoría de los escaños.

El poder judicial de Tanzania es frágil desde el punto de vista formal y político. Se garantiza la seguridad en el cargo, pero es el presidente quien nombra a los jueces del Tribunal Superior. La calidad del sector judicial se ve perjudicada por la falta de recursos, los bajos salarios, la ineficacia y el acceso limitado a los tribunales inferiores para la mayoría de los ciudadanos (Gloppen 2003).

Históricamente, se ha utilizado a la administración pública para recompensar a los miembros de la coalición de gobierno mediante nombramientos y garantizando el éxito electoral (en primera instancia, los políticos, el ejército, los administradores de los partidos, los funcionarios públicos y las organizaciones paraestatales y, posteriormente, también los empresarios privados).

Esto ha debilitado la rendición de cuentas política, creando un solapamiento entre el partido y las estructuras estatales, desde el nivel nacional, pasando por los distritos, hasta las aldeas (Harris et al., 2011). Los nombramientos a nivel de distrito, regiones y ministerios se suceden, cada vez más, desde esferas ajenas al servicio público, y carecen de experiencia administrativa y astucia política, socavando así la eficacia de la administración (Eriksen, 2018).

En 2015, el presidente Magufuli hizo de la lucha contra la corrupción una de las prioridades para su Gobierno. El objetivo era encontrar recursos para financiar una ambiciosa agenda de industrialización y atajar la escasez de financiamiento para el partido. El Gobierno eliminó de la nómina a 16 000 «trabajadores fantasma» en 2016. Se despidió a 10 000 funcionarios públicos por no poder presentar sus diplomas académicos. Además, Magufuli prescindió de varios funcionarios importantes, desmantelando así el clientelismo existente y reemplazándolo con uno nuevo.

Estas medidas le han valido al presidente una enorme popularidad entre el público (con la ayuda del aumento de la asignación presupuestaria gubernamental para financiar la educación gratuita).

No obstante, también ha creado una cultura de miedo e incertidumbre en el funcionariado y la clase política que podría obstaculizar la reforma de los servicios públicos (UNICEF, 2017).

A pesar de cosechar algunos resultados, el enfoque vertical de Magufuli en la lucha contra la corrupción tiene limitaciones. No ha repercutido en los estratos inferiores de la estructura piramidal de la coalición gobernante. Los centros de corrupción han conservado su poder y han resistido el cambio (Andreoni, 2017).

Los servicios de seguridad, implicados en casos de corrupción, están protegidos de posibles enjuiciamientos. Por otra parte, algunos instrumentos de inversión esenciales, como la pensión pública y los fondos de la seguridad social, se desvían a políticos y proyectos inmobiliarios especulativos, por lo que una reforma radical se torna improbable (Eriksen, 2018).

El proceso de descentralización mediante el traspaso de competencias comenzó en 1972 y se reforzó considerablemente en los 90. Aunque la orientación en materia de políticas y la asignación de recursos permanecen muy centralizados, los gobiernos locales controlan presupuestos significativos.

Sin embargo, la descentralización no ha supuesto una mejora de la transparencia, la responsabilidad ni el cumplimiento de la ley. Al contrario, las reformas de mercados como la del sector agrario ha conllevado que aumente la importancia de los Gobiernos locales para empresas de todos los tamaños, y se han convertido en una valiosa fuente de ingresos para los funcionarios, los políticos locales y la comunidad empresarial.

La distinción entre el Gobierno central y el local se difumina por la figura de los comisarios de distrito, nombrados por el presidente y que atesoran un poder considerable y, a veces, informal (Harris et al., 2011).

Industria

Tanzania posee el sector de las industrias extractivas más desarrollado de África oriental. La producción de petróleo y la minería de oro son esenciales para las ambiciones de industrialización del Gobierno y tienen el potencial de incrementar los ingresos nacionales y proporcionar una renta importante tanto al Estado como a las élites políticas y burocráticas.

Estas industrias han sido el escenario de reiteradas reformas legislativas y de la fijación de objetivos. Un ejemplo de esto es el Plan Maestro del Sistema Energético, con el que se prevé que la cuota del carbón en la producción de electricidad pase de 0 % a 35 % y que la capacidad de gas natural aumente en más del 490 % en los próximos 40 años.

Sin embargo, las industrias extractivas afrontan diferentes desafíos. La desconfianza ha reinado en la relación entre el sector público y el privado (Andreoni, 2017). En el pasado, el Estado obstaculizó deliberadamente el desarrollo de empresas privadas adoptando características de un Estado desarrollista y, posteriormente, Ujamaa, una ideología socialista que pretende fortalecer al Estado y forjar una identidad nacional (Therkildsen & Bourgoin, 2012).

A pesar de las reformas económicas de los años 80 y la aparición de intereses empresariales y su incorporación a la coalición gobernante, la desconfianza mutua no se ha desvanecido (Eriksen, 2018).

A pesar de ello, Magufuli indicó al sector privado que está dispuesto a cooperar para alcanzar un acuerdo que implique la asignación de ingresos para inversiones productivas en sectores industriales, eso sí, quiere controlar esos ingresos (Andreoni, 2017).

La integridad técnica de la burocracia en el sector minero se consideraba deficiente, ya que los altos funcionarios acataban las órdenes de búsqueda de rentas de los políticos o se les ignoraba en cuestiones importantes en materia de políticas, contratación pública y regulación (Kelsall y Cooksey, 2011; Eriksen, 2018).

El desarrollo del sector petrolero se vio obstaculizado por la combinación de una gestión de rentas cuestionable y unos procesos de toma de decisiones y políticas mal coordinados, lo que impidió que el sector se beneficiara de unas condiciones de mercado favorables.

Eriksen (2018) sugiere algo de crucial importancia, y es que el Ministerio de Energía y Minerales no está interesado en la planificación o coordinación conjunta con otros ministerios, lo cual le ha permitido identificar, aislar y recaudar

las posibles rentas. Además, el sector minero debe lidiar con su implicación en violaciones de derechos humanos, acaparamientos de tierras y daños medioambientales (BTI, 2020).

Los objetivos presupuestarios de la Administración actual (basados en el programa de industrialización del Gobierno) son ambiciosos y han requerido nuevas fuentes de financiamiento. Pederson y Kweka (2017) exponen que las inversiones del hemisferio sur (en especial, de China, India y Mauricio) pueden adaptarse con más facilidad a las ambigüedades de los marcos jurídicos por los que se rigen inversiones como la adquisición de terrenos en Tanzania. Eriksen (2018) afirma que un aumento de estas inversiones podría ser útil para afianzar esas relaciones entre el Estado y el sector empresarial que no favorecen el crecimiento inclusivo.

Participación en la esfera internacional

Los flujos de ayuda a Tanzania están en declive desde hace años. La ayuda como porcentaje del presupuesto gubernamental cayó de un 44 % en 2004/5 a un 7 % en 2015/16.

La contribución de los donantes se ha materializado fundamentalmente en forma de soporte técnico en áreas de importancia estratégica para el Gobierno. Ejemplos de esto son el apoyo de Noruega al sector petrolero, el respaldo japonés al sector del gas natural y la ayuda del Reino Unido al sector educativo (Eriksen, 2018).

El compromiso de Tanzania con las normas internacionales de gobernanza y rendición de cuentas ha ido decayendo. Esto, junto con la disminución de la ayuda, ha dejado menos margen para que los donantes busquen mejoras en la rendición de cuentas y la corrupción (ibid).

Tanzania se sumó a Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) en 2009 y a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en 2011 con el objetivo, quizás, de mejorar su reputación internacional (David-Barrett y Okamura, 2015). Sin embargo, Eriksen (2018) sugiere que el compromiso personal de Kikwete (el anterior presidente) con estas iniciativas no fueron acompañadas de cambios transformadores, y Tanzania abandonó la OGP durante la presidencia de Magufuli en 2017.

Tanzania adopta una postura cautelosa respecto a la Comunidad de África Oriental, de la que es miembro. El Gobierno prefiere abordar sus intereses mediante relaciones bilaterales, tal y como puso de manifiesto su acuerdo con Uganda en 2016 para trazar el oleoducto de Uganda para la exportación de petróleo crudo por Tanzania (Africa Confidential, 2016).

Se considera que Tanzania está en riesgo de sufrir un extremismo violento procedente de Somalia, el epicentro regional. Aunque sus repercusiones sean menos palpables que en otros países como Kenia, en los últimos años se han sucedido varios atentados terroristas provocados por grupos simpatizantes o relacionados directamente con Al-Shabaab.

Sociedad civil y participación ciudadana

Durante la última década, se ha reducido aún más el espacio para expresar opiniones discrepantes, ya sea por parte de la oposición, de los medios de comunicación o de la sociedad civil (Freedom House, 2020; BTI, 2020).

En la actualidad, la sociedad civil teme sobrepasar los límites. Las OSC y los activistas se ven obligados a elegir entre seguir trabajando en asuntos importantes pero posiblemente controvertidos, como las industrias extractivas, o asumir un enfoque más tecnocrático para respaldar los servicios públicos.

Las protestas y manifestaciones, como las acontecidas contra el gasoducto de Mtwara-Dar es Salaam en 2013, fueron contrarrestadas por fuertes reacciones por parte del Estado. En 2019, se anuló la inscripción en registros públicos de seis ONG por «ir en contra de sus objetivos» (Freedom House, 2020). Eriksen (2018) sugiere que el sector de las ONG en Tanzania suele realizar un trabajo de incidencia escaso liderado por activistas cercanos al régimen y que deciden trabajar en temas no controvertidos.

La mejora del entorno empresarial parece ser uno de estos temas que no despiertan polémica. Por ejemplo, el programa BEST-Dialogue, financiado por donantes, ha respaldado a organismos de representación sectorial y nacional para ejercer presión en favor de una mejora del ámbito empresarial, ayudando a impulsar los intereses económicos del Gobierno.

En este contexto, las OSC profesionales modernas son un fenómeno relativamente nuevo. Entre 1993 y el año 2000, Tanzania experimentó un aumento de 38 veces en el número de ONG registradas (de 224 a 8,499). La mayoría de estas trabajaban en el ámbito de la prestación de servicios, pero algunas ONG intentaron involucrarse en la política, influidas en cierto modo por la comunidad internacional de la que dependían muchas de ellas para su financiamiento.

En un primer momento, las OSC estaban concentradas en las grandes ciudades. Sin embargo, la descentralización y la disponibilidad de financiamiento de donantes conllevó el crecimiento de las OSC en los distritos (Eriksen, 2018; Harrison, 2018).

La obligatoriedad de consultar a la sociedad civil y a las comunidades para la elaboración del primer documento para respaldar la lucha contra la pobreza de Tanzania normalizó la implicación de la sociedad civil en el desarrollo de políticas. Otros cambios, como la reforma de las instituciones de supervisión entre 2005 y 2010 abrieron aún más los espacios para la sociedad civil.

Sin embargo, estos cambios no han tenido grandes repercusiones. Las reformas se han revocado en respuesta a la exposición de la gran corrupción, que apuntaló la solución política. Esto supuso un debilitamiento del CCM, corroborado por los resultados en las elecciones de 2015, en las que Magufuli se hizo tan solo con el 58 %, el porcentaje más bajo de la historia del país para el partido en el Gobierno.

Para muchas organizaciones, la contracción del espacio cívico es un problema de trasfondo junto con otras prioridades y dificultades a largo plazo (Harrison 2018). Esto sucede especialmente a escala subnacional, donde se da una interacción más constante entre las OSC y el Gobierno, y donde los esfuerzos están más concentrados en la prestación de servicios que en la incidencia.

Algunas formas de trabajo de incidencia parecen ser menos delicada. Por ejemplo, las organizaciones parajudiciales no muestran signos de sufrir un impacto negativo. Además, algunas organizaciones han encontrado maneras de formular la incidencia en términos menos adversos y, como consecuencia, las OSC se dedican a mediar en los diálogos en lugar de comunicar sus propios mensajes. En relación con lo anterior, una fuente de la sociedad civil expresó lo siguiente:

«Las OSC en Tanzania pueden conseguir grandes logros siempre y cuando se utilicen bastantes pruebas para cuestionar el statu quo. En este caso, el Gobierno considera que emprenden acciones de índole política y, consecuentemente, entabla una consulta eficaz. Si levantan la cabeza para hacer observaciones sobre cuestiones asociadas con el posicionamiento de un partido político, son silenciadas... Por este motivo, los donantes deben respaldar la generación de evidencia por parte de las OSC para que, mediante esta, puedan sentarse a dialogar con el Gobierno. Así es cómo las OSC pueden llegar a complementar los esfuerzos del Gobierno».

(Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)

La relación entre las OSC y el Gobierno en Tanzania está influenciada por quién tiene los fondos, la capacidad y la legitimidad para ejecutar un proyecto, incluyendo los destinados a mejorar los servicios. Teniendo en cuenta que no es muy probable que ninguna parte ostente el monopolio de estos recursos, las OSC y el Gobierno se necesitan mutuamente (Harrison, 2018).

4. METODOLOGÍA Y DATOS

4.1 Tendencias internacionales en la TPA: metodología y datos

Se han adaptado artículos sobre tendencias mundiales en el ámbito de la TPA extraídos de un informe no publicado, consistente en un análisis del panorama de la TPA realizado por OTT Consulting con el objetivo de sustentar la nueva estrategia quinquenal de concesión de subvenciones de la Hewlett Foundation para el período 2020-2025. Esta evaluación rápida de la evidencia de las tendencias mundiales tenía por objetivo abordar dos cuestiones del análisis panorámico:

1. Qué conocemos del papel que desempeña la transparencia y la participación en la mejora de la rendición de cuentas/buena gobernanza en relación con los subcampos de la TPA escogidos?
2. ¿Qué lagunas existen en la base empírica?

Los subcampos de la TPA escogidos por la Hewlett Foundation son: transparencia presupuestaria y del gasto; gobernanza de los recursos naturales; reforma de la contratación pública; inversiones responsables y comportamiento corporativo; responsabilidad social; y sistema fiscal.

Para tratar estos asuntos, se trazó una estrategia de búsqueda para encontrar publicaciones relevantes y recientes por subcampo prioritario. El primer objetivo de la estrategia fue identificar varias bases de datos pertinentes, tanto de organizaciones que trabajan en cada subcampo como otras bases de datos más amplias y, posteriormente, se efectuaron las indagaciones utilizando términos de búsqueda relevantes y oportunos.

Una vez realizadas las búsquedas, el objetivo se centraba en encontrar y resumir tres publicaciones para cada subcampo y elegir la investigación que abordara de manera más acertada la cuestión de la investigación. En la medida de lo posible, utilizamos revisiones sistemáticas y otros tipos de metaanálisis para no sesgar los hallazgos como consecuencia de la cantidad limitada de informes para cada subcampo. La investigación arrojó un total de 99 informes, de los que se escogieron 18. La relación bibliográfica completa está disponible [aquí](#). En la sección siguiente se incluye un resumen de la evaluación rápida de la evidencia por cada tema prioritario (en orden alfabético).

4.1.1 Bases de datos consultadas

- Alianza para el Gobierno Abierto (divisiones de Salud, Recursos Generales e Industrias Extractivas)
- Tax Justice Network
- International Centre for Tax and Development
- Center for Global Development
- The B-Team
- Open Contracting Partnership
- Natural Resource Governance Institute
- Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés)
- Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés)
- International Budget Partnership
- Transparency and Accountability Initiative
- Repositorio Abierto de Conocimientos del Banco Mundial
- Chr. Michelsen Institute
- Overseas Development Institute
- Banco Africano de Desarrollo
- Financial Transparency Coalition
- Research for Development Outputs
- Global Partnership for Social Accountability
- Accountability Research Centre
- Action for Accountability and Empowerment
- Institute of Development Studies
- GSDRC Applied Knowledge Services
- Eldis
- Base de datos de 3ie (sobre evaluaciones del impacto y revisiones sistemáticas)
- DEREc (Centro de Recursos de Evaluación del CAD)
- Google Académico
- Red sobre la gobernanza del CAD (GovNet)

4.1.2 Intelectuales entrevistados de todo el mundo

Tras una selección meticulosa, se pidió a los entrevistados que hablaran sobre sus opiniones respecto a temas de su especialidad, con un particular énfasis en África. Se trataba de entrevistas semiestructuradas en torno a una serie de preguntas amplias con mucha flexibilidad para fomentar que surgieran y se exploraran ideas. Las entrevistas se

grabaron y se transcribieron, y los datos obtenidos se han empleado para elaborar y fundamentar las ideas expresadas en el presente informe.

***Responsabilidad social en materia de salud:
Sr. Jeff Thindwa***

Jeff Thindwa es el gestor de programas para la Alianza Mundial para el Fortalecimiento de la Responsabilidad Social en las Prácticas Mundiales de Buen Gobierno (GGP, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. Se incorporó al Banco Mundial en el año 2000 y ocupó varios cargos en Desarrollo Social antes de trasladarse al Instituto del Banco Mundial en 2010 para dirigir al equipo de Responsabilidad Social, llegando a convertirse en director de Prácticas. Antes de unirse al Banco Mundial, Jeff trabajó para la administración pública, el sector privado y la sociedad civil.

***Reforma de la contratación pública (contratación abierta):
Sra. Nkemdilim Ilo***

Nkemdilim Ilo es la directora ejecutiva del Public and Private Development Centre (PPDC), con sede en Nigeria. Se trata de una organización pionera en la contratación pública y las actividades de supervisión de contratos en Nigeria, por ejemplo, abogando con éxito por la adopción y plena aplicación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas.

***Sistema fiscal (movilización de los ingresos fiscales internos):
Sr. Alvin Mosioma***

Alvin Mosioma es el fundador y director ejecutivo de Tax Justice Network Africa, una red panafricana de incidencia e investigación formada por 32 miembros en 16 países africanos centrada en la justicia fiscal y en frenar los IFFs de África. Es una figura influyente en materia de política fiscal en África y ha dirigido numerosas campañas de la sociedad civil en el continente desde 2007.

***Inversión responsable y comportamiento empresarial:
Sr. Ewan Livingston-Docwra***

Ewan Livingston-Docwra es estratega de causa en The B Team, encargado de encabezar la labor de la organización en favor de una fiscalidad responsable, incluyendo los principios fiscales responsables, parte de la iniciativa por la gobernanza y la transparencia. Anteriormente, fue director de asociaciones corporativas en ActionAid.

Gobernanza de los recursos naturales:

Sra. Evelyne Tsague

Nacida en Camerún, Evelyne Tsague es responsable del desarrollo y apoyo de las actividades regionales en África occidental del Natural Resource Governance Institute (NRGI, por sus siglas en inglés). Su trabajo en el NRGI abarca los siguientes campos: definición de temas de investigación, fomento de capacidades y necesidades de asistencia técnica a escala local, nacional y regional.

Transparencia/monitoreo del presupuesto y el gasto:

Dr. Abraham Rugo Muriu

Abraham Rugo Muriu es el director nacional en Kenia de International Budget Partnership y trabaja desde Nairobi. Antes de incorporarse a IBP en 2017, trabajó para el Institute of Economic Affairs y como consultor del sector público.

4.1.3 Referencias bibliográficas

Amin, L. (2017) [Making the case for open contracting in healthcare procurement](#). Berlin: Transparency International.

Bauhr, M. and Grimes, M. (2014). [Indignation or Resignation: The Implications of Transparency for Societal Accountability](#). *Governance* 27(2): 291–320.

Bellows. (2020). [Bridging the Elite-Grassroots Divide Among Anticorruption Activists](#). Washington, D.S.: Carnegie Endowment for International Peace.

Bugay, Y. (2016). ProZorro: [How a volunteer project led to nation-wide procurement reform in Ukraine](#). Washington, D.C.: Open Contracting Partnership.

Cucciniello, M., G. Porumbescu, and S. Grimmelikhuijsen. [25 years of transparency research: Evidence and future directions](#). *Public Administration Review* 77(1): 32-44.

Danhoundo, Georges et al., (2018) [Improving social accountability processes in the health sector in sub-Saharan Africa: a systematic review](#), *BMC Public Health* (2018) 18:497.

Datta and Baertl (2020). [Activists and policy experts: Exploring think tank engagement with social movements](#). On Think Tanks Working Paper 8. On Think Tanks.

De Renzio, Paolo and Mastruzzi, Massimo, (2016) [How does civil society use budget information? Mapping fiscal transparency gaps and needs in developing countries](#). Washington, D.C.: International Budget Partnership

- de Renzio, P. Lakin, J. and Cho, C. (2019). [Budget Credibility Across Countries: How deviations are affecting spending on social priorities](#).
- de Renzio and Lakin, J. (2020). [A Taxing Journey: How civic actors influence tax policy Lessons from seven case studies on civil society engagement](#). Washington, D.C.: International Budget Partnership.
- de Renzio, P. and Wehner, J.(2015). [The impacts of fiscal openness: a review of the evidence](#). Washington, D.C.: Global Initiative for Fiscal Transparency and International Budget Partnership.
- Dom, Roel (2018) [Taxation and accountability in sub-Saharan Africa. New evidence for a governance dividend](#). London: Overseas Development Institute.
- Eisen, N., Kaufmann, D., Heller, N., Preston Whitt, J., Picón, M.G., Bassetti, V. and Hudak, J. (2020). [The TAP-Plus Approach to Anti-Corruption in the Natural Resource Value Chain](#). Leveraging Transparency to Reduce Corruption (LTRC).
- Finnemore, M. & Sikkink, K. (1998). [International norm dynamics and political change](#). *International Organization* 52 (4): 887-917.
- Gaventa, J. (2019). [Can transparency make extractive industries more accountable?](#) Opinion posted on 8 February 2019. Brighton: Institute of Development Studies.
- Gaventa, J. and McGee, R. (2013) [The Impact of Transparency and Accountability Initiatives](#). *Development Policy Review* 31(S1): 3-28.
- GhanaWeb. (2020) [#BringbackDomelevo: Over 400 CSOs join forces against Auditor-General's forced leave](#).
- GIZ (2016). [Assessing the Effectiveness and Impact of the Extractive Industries Transparency Initiative \(EITI\)](#).
- Gulrajani, N. and Mills, L. (2019). [Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida](#). Stockholm: Expert Group for Aid Studies.
- IBP/IDI (2020). [All hands on deck: Harnessing accountability through external public audits An assessment of national oversight systems](#). Washington, D.C. and Oslo: International Budget Partnership and INTOSAI Development Initiative

- Joshi, A. (2017) [Legal Empowerment and Social Accountability: Complementary Strategies Toward Rights-based Development in Health?](#) World Development Vol. 99, pp. 160–172.
- Lakin, J. (2020). [The politics of tax reform in low- and middle-income countries: A literature review](#). Washington, D.C.: International Budget Partnership.
- Lührmann, A., Maerz, S.F., Grahn, S., Alizada, N., Gastaldi, L., Hellmeier, S., Hindle, G. and Lindberg, S.I. (2020). [Autocratization Surges – Resistance Grows. Democracy Report 2020](#). Varieties of Democracy Institute (V-Dem).
- Martinsson, J. (2011). [Global Norms: Creation, Diffusion, and Limits](#). Communication for Governance & Accountability Program discussion paper. Washington, D.C.: World Bank.
- McDevitt, Andy (2017) [Transparency and accountability initiatives in the extractives sector](#).
- Mills, L. (2019) Law vs. Practice: A review of the implementation gap. London: Natural Resource Governance Institute. (Unpublished).
- Mills, L. (2019). [Making the Budget Work for Ghana: Final evaluation](#). Washington, D.C.: The Global Partnership for Social Accountability (GPSA).
- Mills, L. (2016). [Decentralisation of Budgeting Processes](#). London and Birmingham: Department for International Development and University of Birmingham.
- Mohiuddin, F and de Renzio, P. (2020). [Of citizens and taxes: A global scan of civil society work on taxation](#). Washington, D.C.: International Budget Partnership.
- Müller, R., Spengel, C. and Vay, H. (2020) [On the Determinants and Effects of Corporate Tax Transparency: Review of an Emerging Literature](#), Discussion Paper ZEW
- NRGI (2019). [Resource Governance Index: From Legal Reform to Implementation in Sub-Saharan Africa](#). London: Natural Resource Governance Institute.
- Nyabuga, G. (2019) [Media Landscape and Open Contracting Narrative in Kenya, Malawi and Tanzania](#).
- Oats, L. and Tuck, P. (2019) [Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution?](#) Accounting and Business Research, 49:5, 565-583.

- OECD. (2014). [*Development Assistance and Approaches to Risk in Fragile and Conflict Affected States*](#). Paris.
- Open Government Partnership (2020) [*Global Report. Democracy Beyond the Ballot Box*](#). Washington, D.C.
- Prichard, Wilson (2016) [*What have we learnt about taxation, statebuilding and accountability?*](#)
- Rudiger, Anja (2017/18) [*State of the field review: Fiscal Transparency and Accountability*](#). International Budget Partnership, Carnegie Endowment for International Peace, and Transparency and Accountability Initiative
- Smith, E. with Rosenblum. P. (2011). [*Enforcing the Rules: Government and Citizen Oversight of Mining*](#). New York, NY: Natural Resource Governance Institute.
- Sovacool, B.K. & Andrews, N. (2015). [*Does Transparency Matter? Evaluating the governance impacts of the Extractive Industries Transparency Initiative \(EITI\) in Azerbaijan and Liberia*](#). *Resources Policy* 45 (2015): 183-192.
- Telgen, J. et al., (2016) [*Public procurement reform: assessing interventions aimed at improving transparency*](#).
- Transparency and Accountability Initiative (2018) [*Taxation and accountability in developing countries*](#). Washington, D.C.
- Transparency and Accountability Initiative (2019) [*Civil society engagement in tax reform*](#). Washington, D.C.
- Transparency International (2020). [*Murky havens and phantom profits. The Tax Affairs of EU and UK banks*](#). Berlin.
- World Bank (2016). [*Integrating social accountability approaches into extractive industries projects*](#). Washington, D.C.
- World Bank (2017). [*World Development Report: Governance and the Law*](#). Washington, D.C.

4.2 Tendencias de financiamiento: metodología y datos

Los artículos sobre las tendencias de financiamiento han sido elaborados por Jenny Lah. Se han escogido y adaptado de un informe no publicado, redactado para complementar un análisis del panorama de la TPA realizado por OTT Consulting con el objetivo de

sustentar la nueva estrategia de concesión de subvenciones de la Hewlett Foundation para el período 2020-2025.

El análisis se basa en datos, documentos de financiadores, otros informes y una serie de conversaciones semiestructuradas con 16 financiadores y personal de la red. El Sistema de Notificación por parte de los Países Acreedores del sistema del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE es una fuente clave para determinar la amplitud y las tendencias en el financiamiento. Además, se han consultado otras fuentes de datos, como SDG Funders, la iniciativa Advancing Human Rights de la Human Rights Funders Network (HRFN, por sus siglas en inglés) y los informes de Candid, Aid Atlas y la International Aid Transparency Initiative (IATI) a través de d-portal.

En cuanto a la documentación, se exploraron los sitios web de los financiadores y se realizaron búsquedas en Google para descubrir noticias, anuncios y otros informes. Estos fueron los principales sitios web consultados: Devex, Donor Tracker, el CAD de la OCDE y la Transparency and Accountability Initiative (TAI).

Debido a las restricciones de tiempo y datos, se excluyeron algunos tipos de financiamiento, como el financiamiento gubernamental a nivel nacional, el financiamiento comunitario, el sector privado con ánimo de lucro y el financiamiento auspiciado por el Estado chino. En el caso de numerosos asuntos relacionados con la TPA, la principal fuente de financiamiento son los Gobiernos nacionales. Esto es algo que se debe tener en cuenta a la hora de interpretar los datos ya que una disminución del financiamiento internacional podría significar, en realidad, un aumento del financiamiento gubernamental.

Se realizaron entrevistas a personas conectadas con las organizaciones siguientes:

- Ministerio de Asuntos Exteriores, Dinamarca (donante bilateral)
- Ford Foundation (entidad filantrópica)
- Gates Foundation (entidad filantrópica)
- HRFN (Red)
- IDRC (África occidental) (donante bilateral)
- Luminate (entidad filantrópica)
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Finlandia (donante bilateral)
- Red sobre la gobernanza de la OCDE (GovNet, red)
- OSF (entidad filantrópica)
- OSIWA (entidad filantrópica)
- Sida (donante bilateral)
- TAI (Red)

- Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (donante bilateral)
- USAID (donante bilateral)
- Wellspring (entidad filantrópica)
- Banco Mundial (donante multilateral)

4.2.1 Referencias bibliográficas

African Development Bank. (2019, December 11). ADF-15 replenishment: Donors commit \$7.6 billion, a 32% boost from last replenishment, in support of Africa's low-income, fragile, countries. Retrieved from African Development Bank News:

<https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/adf-15-replenishment-donors-commit-76-billion-32-boost-last-replenishment-support-africas-low-income-fragile-countries-33074>

African Development Fund. (2016). *ADF-14 Report: Fourteenth Replenishment of the African Development Fund*. Retrieved from African Development Fund Portal:

<https://frmb.afdb.org/documents/78/ADF-14%20Report.pdf>

African Development Institute. (2020, September). *Policies for Enhancing Resilience and Transparency in Public and Private Finance Management in post COVID-19 Africa*. Retrieved from AfDB News and Events: <https://www.afdb.org/en/news-and-events/events/policies-enhancing-resilience-and-transparency-public-and-private-finance-management-post-COVID-19-africa-37522>

Alliance Sahel. (2020). *The Sahel Alliance*. Retrieved from <https://www.alliance-sahel.org/en/sahel-alliance/>

Baguios, A. (2020, July 3). *Aid may be inherently racist and colonial, but altruism is not — that's a cause for hope*. Retrieved from Aid Re-imagined on Medium:

<https://medium.com/aidreimagined/aid-may-be-inherently-racist-and-colonial-but-altruism-is-not-thats-a-cause-for-hope-c77e7a33b899>

Batten, S. T., Jones, E. M., MacKrell, L., & Petit-Frere, J. (2020, August 25). *Guiding a Giving Response to Anti-Black Injustice*. Retrieved from Bridgespan Group:

<https://www.bridgespan.org/insights/library/philanthropy/guiding-a-giving-response-to-anti-black-injustice#Framework>

Biden, J. (2019, July 20). *The Power of America's Example: The Biden Plan for Leading the Democratic World to Meet the Challenges of the 21st Century*. Retrieved from JoeBiden.com: <https://joebiden.com/americanleadership/>

OTT Consulting

Brown, A. (2020, September 14). *New Fund Seeks to Put Racial Equity at the Center of Philanthropy*. Retrieved from Triple Pundit:

<https://www.triplepundit.com/story/2020/racial-equity-philanthropy/260076>

Candid. (2020). *Funding for racial equity*. Retrieved from Candid Special Issue:

<https://candid.org/explore-issues/racial-equity>

Cheney, C. (2020, January 6). *INGOs can help dismantle development's 'white gaze,' PopWorks Africa founder says*. Retrieved from Devex:

<https://www.devex.com/news/ingos-can-help-dismantle-development-s-white-gaze-popworks-africa-founder-says-96237>

Daar, N., & Tamale, N. (2020, October 12). *A Virus of Austerity? The COVID-19 spending, accountability, and recovery measures agreed between the IMF and your government*. Retrieved from Oxfam Blogs: <https://www.oxfam.org/en/blogs/virus-austerity-COVID-19-spending-accountability-and-recovery-measures-agreed-between-imf-and>

DAC Network on Governance. (2021, January 22). *DAC Official Development Assistance to Governance: An Overview (2009-2018)*. Retrieved from OECD DAC:

[https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/GOVNET\(2021\)5/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/GOVNET(2021)5/en/pdf)

DAC Working Party on Development Finance Statistics. (2020). *COVID-19 Survey – Main Finding*. Paris: OECD. Retrieved from

[http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT\(2020\)35&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT(2020)35&docLanguage=En)

Dalberg. (2020, July 23). *Philanthropy in the era of COVID-19*. Retrieved from

Dalberg: <https://dalberg.com/our-ideas/philanthropy-in-the-era-of-COVID-19/>

Development Initiatives. (2021, April 22). *DI's response to Raab's statement on aid cuts*. Retrieved from Development Initiatives: <https://devinit.org/what-we-do/news/dis-response-raabs-statement-aid-cuts/>

Dickson, A. (2020, November 26). *Spending Review: Reducing the 0.7% aid commitment*. Retrieved from House of Commons Library:

<https://commonslibrary.parliament.uk/spending-review-reducing-the-aid-commitment/>

Dodd, A., Breed, D., & Coppard, D. (2020, November 9). *How is aid changing in the COVID-19 pandemic?* Retrieved from Development Initiatives:

<https://devinit.org/resources/how-aid-changing-COVID-19-pandemic/>

Duggan et al., J. (2020, October). *Is the World Bank's COVID-19 Crisis Lending Big Enough, Fast Enough? New Evidence on Loan Disbursements*. Retrieved from Center for Global Development: <https://www.cgdev.org/sites/default/files/world-banks-COVID-crisis-lending-big-enough-fast-enough-new-evidence-loan-disbursements.pdf>

Equality Fund; Canadian Women's Foundation; Community Foundations of Canada. (2020, April). *Principles for Feminist Funding*. Retrieved from Equality Fund: <https://equalityfund.ca/files/share/Feminist-Philanthropy-EN.pdf>

European Commission. (2020). *Africa-EU Partnership*. Retrieved from European Commission International Cooperation and Development: https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/africa-eu-partnership_en

European Commission. (2020, October 20). *EU steps up support for Africa's Central Sahel countries*. Retrieved from EU Press Corner: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1950

European Partnership for Democracy. (2019). *Louder than words? Connecting the dots of European democracy support*. Bruxelles: European Partnership for Democracy. Retrieved from <https://epd.eu/review/>

European Union. (2020, November). *EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024*. Retrieved from EEAS Human Rights and Democracy: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/414/human-rights-democracy_en

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany. (2017). *A Marshall Plan with Africa*. Retrieved from BMZ: https://www.bmz.de/en/countries_regions/marshall_plan_with_africa/index.html

Ford Foundation. (2021, March 25). *Ford Foundation Supports Launch of First Global Fund Addressing Key Issues Facing Black Women*. Retrieved from Ford Foundation News: <https://www.fordfoundation.org/the-latest/news/ford-foundation-supports-launch-of-first-global-fund-addressing-key-issues-facing-black-women/>

Ford Foundation. (ND). *Funder Guidance for Engaging Grantees on DEI*. Retrieved from Ford Foundation Learning: https://www.fordfoundation.org/media/5000/ff_dei_funderguidance_final_2.pdf

Heller, N. (2016, November 7). *Open Government: Moving beyond arguments on the 'right thing to do'*. Retrieved from R4D: <https://r4d.org/blog/open-government-moving-beyond-arguments-right-thing/>

OTT Consulting

Hodal, K. (2019, October 14). *Aid sector forced into greater transparency by #MeToo movement*. Retrieved from The Guardian:

<https://www.theguardian.com/world/2019/oct/14/aid-sector-forced-into-greater-transparency-by-metoo-movement>

Horta, K., & Wang, W. (2020, October 22). *The AIIB's Transparency Deficit*. Retrieved from Project Syndicate:

<https://www.project-syndicate.org/commentary/asian-infrastructure-investment-bank-environmental-social-risks-by-korinna-horta-and-wawa-wang-2020-10>

International IDEA. (2020, December 9). *Nearly half of democracies have regressed on basic rights in 2020 with measures to combat COVID-19 pandemic*. Retrieved from International IDEA News:

<https://www.idea.int/news-media/news/nearly-half-democracies-have-regressed-basic-rights-2020-measures-combat-COVID-19>

Jones, M. (2020, October 6). *COVID aid could bring years of austerity, charities warn IMF*. Retrieved from Reuters:

<https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-imf-austerity-int/COVID-aid-could-bring-years-of-austerity-charities-warn-imf-idUSKBN26R1KZ>

Kellogg Foundation. (2020). *About*. Retrieved from Racial Equity 2030:

<https://www.racialequity2030.org/about>

Lah, J. (2017). *Think Tank Funding in Developing Countries: Status and Outlook*.

Ottawa: Think Tank Initiative. Retrieved from

http://www.thinktankinitiative.org/sites/default/files/Think%20Tank%20Funding%20in%20Developing%20Countries_Final%20Report.pdf

Lawrence, S., & Fine, M. (2021, January). *Approaching the Intersection: Will a Global Pandemic and National Movement for Racial Justice Take Philanthropy Beyond Its Silos?* Retrieved from TCC Group:

https://www.tccgrp.com/wp-content/uploads/Approaching-the-Intersection_TCC-Group_January-2021.pdf

Libra Foundation. (2020, September 10). *New Initiative Rallies Philanthropy Behind Black-Led Grassroots Organizing*. Retrieved from Libra Foundation:

<https://www.thelibrafoundation.org/2020/09/new-initiative-rallies-philanthropy-behind-black-led-grassroots-organizing/>

Maloney, C. (2020, March 23). *How the Journey to Self-Reliance is Changing the Way USAID Works*. Retrieved from USAID on Medium:

<https://medium.com/usaid-2030/how-the-journey-to-self-reliance-is-changing-the-way-usaid-works-3074c58f2f2f>

OTT Consulting

Mathew, A., & Naylor, N. (2020, November 11). Anti-Blackness Is Global and Gendered—Philanthropy’s Response Must Be, Too. *Nonprofit Quarterly*. Retrieved from <https://nonprofitquarterly.org/anti-blackness-is-global-and-gendered-philanthropys-response-must-be-too/>

Menocal, A. R., & OECD. (2020, March 4). *What does "inclusive governance" mean?* Retrieved from OECD DAC Network on Governance: <https://www.oecd.org/dac/what-does-inclusive-governance-mean-960f5a97-en.htm>

Ministry for Foreign Affairs, Sweden. (2020, September 25). *Friends in Defence of Democracy*. Retrieved from Government Offices of Sweden: <https://www.government.se/statements/2020/09/announcement-friends-in-defence-of-democracy/>

Mwangi, J., Tsan, M., & Tweed, M. (2020, November 6). *The Role of African Philanthropy in Responding to COVID-19*. Retrieved from Dalberg: <https://dalberg.com/our-ideas/the-role-of-african-philanthropy-in-responding-to-COVID-19/>

OECD. (2020). *Development Co-operation Report 2020*. Paris: OECD. Retrieved from <https://www.oecd.org/dac/development-co-operation-report-20747721.htm>

OECD DAC. (2020). *Development finance data*. Retrieved from OECD Development Co-operation Directorate: <http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/>

OECD DAC. (2021, April 13). *COVID-19 spending helped to lift foreign aid to an all-time high in 2020 but more effort needed*. Retrieved from OECD Newsroom: <https://www.oecd.org/newsroom/cov>

Open Government Partnership. (2020, September 21). *How has social accountability been reshaped to respond to the COVID-19 crisis?* Retrieved from Open Gov Hub: <http://opengovhub.org/events/9/2020/pandemic-promises-tracking-service-delivery-with-social-accountability>

Open Society Foundations. (2020). *Equality and Antidiscrimination*. Retrieved from Open Society Foundation: <https://www.opensocietyfoundations.org/what-we-do/themes/equality-and-antidiscrimination>

Other Foundation. (2014). *Participatory Grant Making: A success story from southern Africa*. Other Foundation. Retrieved from <http://theotherfoundation.org/wp-content/uploads/2014/12/Report-Pilot-Peer-Review-Grant-Making-Initiative.pdf>

OTT Consulting

- Provost, C. (2014, March 14). OECD donors consider pulling plug on aid to richer developing countries. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/global-development/2014/mar/12/oecd-donors-aid-middle-income-countries>
- Raab, D. (2020, November 26). *Official Development Assistance: Foreign Secretary's statement, November 2020*. Retrieved from Foreign, Commonwealth & Development Office: <https://www.gov.uk/government/speeches/official-development-assistance-foreign-secretarys-statement-november-2020>
- Rublee, M. I., & LaVant, A. (2020, October 26). *Disability Inclusion Toolkit*. Retrieved from Ford Foundation Learning: <https://www.fordfoundation.org/work/learning/research-reports/disability-inclusion-toolkit/>
- Schultz, A. (2020, December 22). *Racial Justice Grants Are Surging, but Donors Seek Advice*. Retrieved from Barrons: <https://www.barrons.com/articles/racial-justice-grants-are-surging-but-donors-seek-advice-01608665936>
- Schwier, J., Wallington, C., Holland, M., & Magoronga, W. (2020). *The Landscape of Large-Scale Giving by African Philanthropists*. Boston: Bridgespan Group. Retrieved from <https://www.bridgespan.org/forms/download/download-landscape-large-scale-giving-africa>
- Steensen, S. (2014). Keeping ODA focused in a shifting world. In OECD, *Development Co-operation Report 2014*. Paris: OECD. Retrieved from Development Co-: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/dcr-2014-6-en.pdf?expires=1609633490&id=id&accname=guest&checksum=E4CD91EAD63B42FoCoBCE3F69907303D>
- The Racial Equity Index. (2020). *Global Mapping Survey*. Retrieved from The Racial Equity Index : <https://www.theracialequityindex.org/global-mapping-survey#survey>
- USAID. (2019, November 22). *The Principles of Locally Led Development*. Retrieved from USAID: <https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-economic-growth-education-and-environment/office-local-sustainability/locally-led-development>
- USAID. (2020, February 12). *The Office of Local Sustainability Unsolicited Solutions for Locally Led Development*. Retrieved from USAID Who We Are: <https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-economic-growth-education-and-environment/office-local-sustainability/unsolicited-solutions-for-locally-led-development>

OTT Consulting

USAID. (ND). *Journey to Self-Reliance Fact Sheet*. Retrieved from USAID: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/J2SR_Fact_Sheet.pdf

Van de Poel, J. (2020, June 15). *COVID-19 and Official Development Assistance: current issues and challenges*. Retrieved from Eurodad: https://www.eurodad.org/COVID19_oda_challenges

Weisenfeld, P. (2020, June 17). Calls for racial justice are a wake-up for the global development community. Retrieved from Devex.

World Bank Group. (2020). *Global Governance Program*. Washington, DC: World Bank.

Worley, W. (2020, December 12). *FCDO's chief economist reveals how aid cuts were decided*. Retrieved from Devex: <https://www.devex.com/news/fedo-s-chief-economist-reveals-how-aid-cuts-were-decided-98763>

Zühr, R., Dwyer, S., & Lüdemann, C. (2020, July 2). *Donor countries' international COVID-19 response following the June 27 'Global Goal: Unite for Our Future' summit*. Retrieved from Donor Tracker: <https://donortracker.org/insights/donor-countries-international-COVID-19-response-following-june-27-global-goal-unite-our>

4.3 Instantáneas de la situación en diversos países: metodología y datos

Las instantáneas de la situación en diversos países se han adaptado de un informe no publicado redactado para complementar un análisis del panorama de la TPA realizado por OTT Consulting con el objetivo de sustentar la nueva estrategia de concesión de subvenciones de la Hewlett Foundation. El informe se centró en tendencias con consecuencias para la TPA en una serie de países seleccionados en los que trabaja activamente la Hewlett Foundation: Burkina Faso, Ghana, Kenia, Senegal y Tanzania.

Esta evaluación rápida de la evidencia sobre las tendencias en los países tiene por objetivo abordar dos elementos del análisis panorámico:

1. ¿Qué factores determinan los resultados en materia de gobernanza en los países seleccionados (Burkina Faso, Ghana, Kenia, Senegal y Tanzania), incluyendo las principales causas de una gobernanza deficiente y las lagunas en la rendición de cuentas, así como los factores que contribuyen a la buena gobernanza?
2. ¿Qué desafíos importantes han surgido o se han agravado? En especial, ¿cuál es la prevalencia del cierre del espacio cívico en los países seleccionados?

Para responder a estas preguntas, cuando sea posible y procedente, recopilamos información en dos ámbitos generales: (1) tendencias en el incremento de los ingresos, pobreza, desigualdad, desarrollo humano, desempeño en materia de prestación de servicios y gobernanza (en áreas como la apertura del Gobierno, la responsabilidad política y la eficacia del Estado) y (2) tendencias en factores que influyen en el contexto de la gobernanza y la prestación de servicios. Estos son ejemplos de lo anterior:

- Contexto: puede abarcar la geografía, el perfil demográfico, comportamiento y actitudes de masas y cambios tecnológicos de un país.
- Los intereses y las agendas de actores nacionales, regionales e internacionales en competencia, las relaciones de poder entre ellos y cómo estas han cambiado con el tiempo/la historia.
- Instituciones: las reglas, normas, prácticas y relaciones que influyen en el comportamiento individual y colectivo del ámbito de la gobernanza y la prestación de servicios. Pueden ser formales y ampliamente conocidas, en forma de leyes y normativas, o informales y conocidas únicamente por diferentes grupos de personas.
- Redes de políticas: las relaciones entre los actores responsables de las decisiones relativas a las políticas y los grupos de interés o niveles de gobierno con los que consultan y negocian.
- Ideas sobre gobernanza y prestación de servicios y cómo estas se divulgan a grupos clave de partes interesadas.
- Sucesos (o momentos decisivos), que podrían ser rutinarios o previsibles, como las elecciones, o incidentes imprevistos, como las crisis sociales o las catástrofes naturales.

4.3.1 Métodos y fuentes de datos

Se examinó la documentación y se entrevistó a un experto en gobernanza para cada uno de los cinco países. Entre la documentación figuraba:

- Análisis de política económica a nivel nacional y de sectores.
- Informes nacionales elaborados por Bertelsmann Stiftung, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Freedom House, Civicus y Afrobarómetro.

4.3.2 Limitaciones

Teníamos previsto ofrecer más información sobre las repercusiones de la COVID-19. Sin embargo, la mayoría de nuestros datos provienen de fuentes escritas publicadas antes de la aparición de la pandemia, de ahí la escasez de datos en torno a este tema.

4.3.3 Referencias bibliográficas

Abizaid, O (2019) '[Building a More Inclusive and Prosperous Dakar: Recommendations from Informal Workers](#)'. Published by Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)

Africa Confidential (2014) 'Power Fraud Unravels', Africa Confidential, 55 (19): pp 5-6

Akouwerabou, B.D. and Bako, P. (2013) : "Marchés publics et Petites et moyennes entreprises (P.M.E.) au Burkina Faso : Quelle gouvernance ?"

Andreoni, A (2017) 'Anti-corruption in Tanzania: a political settlements analysis'. Anti-Corruption Evidence (ACE). Working paper 1. School of Oriental and African Studies (SOAS).

Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI) 2020. [Tanzania report](#).

Branch, D. (2011) Kenya: Between Hope and Despair, 1963 – 2011 New Haven and London, Yale University Press

Bratton , M., Seekings, J. and Armah-Attoh, D (2019) 'Better but not good enough? How Africans see the delivery of public services'. Afrobarometer Despatch no. 290.

BTI (2018). [Burkina Faso Country Report](#). BTI.

David-Barrett, E. & Okamura, K. (2015). [Norm Diffusion and Reputation: The Rise of the Extractive Industries Transparency Initiative](#). Governance 29(2): 227-246).

Eriksen, S.S. (2018) 'Tanzania: A Political-Economy Analysis'. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs. Report commissioned by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Feng, J. (2015) '[As African cities grow, rural-urban divides widen too](#)'. 22 July.

Florez, J., Guertzovich, F., Mills, L. and Tonn, J. (2018) [From Grievance to Engagement – How People Decide to Act Against Corruption. Unpacking context and causal mechanisms that determine how and why individuals choose to engage in anti-corruption mechanisms](#). Global Integrity and Transparency International

Freedom House (2020). [Freedom in the World 2020 – Tanzania](#)

- Freedom House. (2018). [Freedom in the World 2018: Burkina Faso Profile](#). Washington, D.C.:
- GAN Anti-corruption portal (2016). [Burkina Faso Corruption Report](#). GAN.
- Garda World (2018). [Burkina Faso Country Report](#). Garda World.
- Global Partnership for Social Accountability. (2015). [Results Framework](#)
- Gloppen, Siri, (2003), 'The Accountability Function of Courts in Tanzania and Zambia' in Democratization vol.10 no 4
- Grandvoinet, H., Ghazia A. and Shomikho R. (2015) Opening the Black Box: The Contextual Drivers of Social Accountability. New Frontiers of Social Policy Series. Chapter 3, pages 83-113. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0481-6
- Harris, D., Domingo, P., Sianga, C., Chengullah, E. and Kavishe, C.B. (2011) '[The Political Economy of Social Accountability in Tanzania: Anti-logging Advocacy and the Mama Mimitu Campaign](#)'. Report. London, Arusha: ODI and Tanzania Natural Resource Forum (TNRF).
- Harrison, T. (2018) Political economy analysis of the relationship between civil society organisations and local government in Tanzania, Brighton: IDS
- Hoffman, Barak and Lindsay Robinson (2009), "Tanzania's Missing Opposition", in Journal of Democracy, Volume 20, Number 4, October, pp.123-136
- Hossain, Naomi and Khurana, Nalini (2019) Donor responses and tools for responding to shrinking space for civil society: a desk study
- Hussmann, Karen and Max Mmuya (2007) Anti-corruption policy making in practice: Tanzania – A Country Case Study. U4 REPORT 1:2007 PART 2E
- Hyden, Goran (2005) [Why Do Things Happen The Way They Do?: A Power Analysis of Tanzania](#)
- Kelsall, T. (2008). [Going with the Grain in African Development?](#) Development Policy Review 26(6)
- Kelsall, Tim, Siri Lange, Simeon Mesaki and Max Mmuya with Jehova Roy Kaaya, Zephania Kambele, Glory Minja, Martin Mlele, Siana Ndesaulwa and Lucy Shule

(2005) 'Understanding Patterns of Accountability in Tanzania Component 2: The bottom-up perspective - Final Report', Dar es Salaam, Bergen, Oxford: REPOA, Christian Michelsen Institute Oxford Policy Management

Khan, Mushtaq (2010) Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions. (Unpublished)

KIPRA – The Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (2019) An Assessment of the Public Expenditure and Financial Accountability in Makueni County. Policy Brief No. 69/2018-2019

Koussoube, E., Loada, A., Nebie, G. and Raffinot, M. (2014). 'Political economy of growth and poverty in Burkina Faso: power, institutions and rents'

Maliti, E. [Inequality in Education and Wealth in Tanzania: A 25-Year Perspective](#). Soc Indic Res 145, 901–921 (2019).

Msafiri, D (2018). '[Public service delivery in Tanzania: Fewer problems and bribes, improved satisfaction](#)'. Afrobarometer Dispatch No. 271. f

Nyirabu, M. (2002) 'The Multiparty Reform Process in Tanzania: The Dominance of the Ruling Party' in The African Journal of Political Science, 2002 Vol. 7 No. 2

O'Meally, S. (2013). [Mapping Context for Social Accountability: A Resource Paper](#). Washington, D.C.: World Bank.

OECD (2017). [Interactive data from OECD: Burkina Faso](#). Paris: OECD.

Pedersen, R.H. and Kweka, O (2017) 'The political economy of petroleum investments and land acquisition standards in Africa: The case of Tanzania'. Resources Policy, Elsevier, vol. 52(C), pages 217-225.

Therkildsen, O and Bourgoin, F (2012) Continuity and change in Tanzania's ruling coalition: legacies, crises and weak productive capacity, DIIS Working Paper 2012:06

Transparency International Kenya (2020) 'County Governance Status Report (CGSR), Nairobi

UNDP (2018) '[Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update - Briefing note for countries on the 2018 Statistical Update Tanzania \(United Republic of\)](#)'.



www.onthinktanks.org